CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE FEDERICO DE CARVAJAL PEREZ

Sesión Plenaria núm. 83

celebrada el jueves, 20 de septiembre de 1984

ORDEN DEL DIA

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados (continuación):

- De la Comisión de Presidencia del Gobierno e Interior en relación con la proposición de Ley Orgánica sobre tipificación penal de la colocación ilegal de escuchas telefónicas. Se tramita por el procedimiento de urgencia («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 146, de 17 de septiembre de 1984).
- De la Comisión de Presupuestos en relación con la proposición de Ley con el fin de que desaparezca la discriminación en el trato que reciben por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, los militares profesionales de la República respecto de los funcionarios civiles comprendidos en dicha ley («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 164, de 19 de septiembre de 1984).

SUMARIO

<i>Se abre la sesión a las diez y diez de la mañana.</i>		
	Página	
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados (continuación)	4121	Proposición de Ley Orgánica sobre tipificación penal de la colocación ilegal de escuchas telefónicas. 4121
		<i>La señora Miranda de Lage presenta el dictamen. Para turno a favor interviene el señor Jaramillo Rodríguez. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Misol de la Iglesia y Carretero Rubio.</i>
		<i>Se aprueba la Exposición de motivos.</i>

	Página		Página
Artículo único	4123	Artículo 2.º	4141
<i>El señor Fernández-Piñar y Afán de Ribera defiende dos enmiendas del Grupo Mixto. Le contesta el señor Carretero Rubio. En turno de portavoces intervienen los señores Fernández-Piñar y Afán de Ribera y el señor Carretero Rubio.</i>		<i>El señor Fernández-Piñar y Afán de Ribera defiende la enmienda número 2, del Grupo Mixto. Para turno en contra hace uso de la palabra el señor Velilla Royo.</i>	
<i>Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto.</i>		<i>El señor Ferrer i Profitós retira la enmienda 9, del Grupo de Cataluña al Senado.</i>	
<i>Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Mixto.</i>		<i>Se rechaza la enmienda del Grupo Mixto.</i>	
<i>Se aprueba la proposición de Ley.</i>		<i>Se aprueba el artículo 2.º</i>	
	Página		Página
De la Comisión de Presupuestos en relación con la proposición de Ley con el fin de que desaparezca la discriminación en el trato que reciben por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, los militares profesionales de la República respecto de los funcionarios civiles comprendidos en dicha Ley	4125	Artículo 3.º	4142
<i>El señor Campoamor Rodríguez presenta el dictamen. Para turno a favor interviene el señor Prat García. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Pozueta Maté, Ferrer i Profitós, Fernández-Piñar y Afán de Ribera, Bosque Hita y Laborda Martín.</i>		<i>El señor Fernández-Piñar y Afán de Ribera da por defendida la enmienda 4, del Grupo Mixto.</i>	
	Página	<i>El señor Bosque Hita defiende una enmienda del Grupo Popular. Para turno en contra hace uso de la palabra el señor Campoamor Rodríguez.</i>	
Preámbulo	4133	<i>Se rechaza la enmienda 4, del Grupo Mixto.</i>	
<i>El señor Bosque Hita defiende las enmiendas del Grupo Popular. En turno de portavoces intervienen los señores Ferrer i Profitós, Fernández-Piñar y Afán de Ribera, Fernández-Fernández-Madrid y Prat García.</i>		<i>Se rechaza la enmienda 37, del Grupo Popular.</i>	
<i>Se rechazan las enmiendas 34, 35 y 36, del Grupo Popular.</i>		<i>Se aprueba el artículo 3.º</i>	
<i>Se aprueba el Título de la Ley y el Preámbulo.</i>			Página
<i>El señor Fernández-Piñar y Afán de Ribera defiende una enmienda del Grupo Mixto. En turno de portavoces interviene el señor Martínón Cejas.</i>		Título II	4144
<i>Se rechaza la enmienda del Grupo Mixto.</i>		<i>El señor Ferrer i Profitós da por defendida la enmienda 13, del Grupo de Cataluña al Senado.</i>	
	Página	<i>El señor Bosque Hita defiende las enmiendas 41 y 42, del Grupo Popular. Para turno en contra interviene el señor Ruiz Mendoza.</i>	
Título I	4138	<i>Se rechaza la enmienda 13, del Grupo de Cataluña al Senado.</i>	
<i>Se aprueba el enunciado.</i>		<i>Se rechazan las enmiendas 41 y 42, del Grupo Popular.</i>	
	Página	<i>Se aprueba el texto del dictamen.</i>	
Artículo 1.º	4138		Página
<i>El señor Ferrer i Profitós defiende las enmiendas 7 y 8.</i>		Artículo 4.º	4145
<i>El señor Fernández-Piñar y Afán de Ribera defiende una enmienda del Grupo Mixto. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Ferrer i Profitós y Martínón Cejas.</i>		<i>El señor Ferrer i Profitós da por defendida la enmienda 10, del Grupo de Cataluña al Senado.</i>	
<i>Se rechaza la enmienda 7, del Grupo de Cataluña al Senado.</i>		<i>El señor Fernández-Piñar y Afán de Ribera da por defendida la enmienda 3, del Grupo Mixto.</i>	
<i>Se rechaza la enmienda 8, del Grupo de Cataluña al Senado.</i>		<i>El señor Prieto Carrasco defiende las enmiendas 45 y 46, del Grupo Popular. Para turno en contra hace uso de la palabra el señor Velilla Royo. En turno de portavoces intervienen los señores Ferrer i Profitós, Bosque Hita y Martínón Cejas.</i>	
<i>Se rechaza la enmienda 1, del Grupo Mixto.</i>		<i>Se rechaza la enmienda 10, del Grupo de Cataluña al Senado.</i>	
<i>Se aprueba el artículo 1.º</i>		<i>Se rechaza la enmienda 3, del Grupo Mixto.</i>	
		<i>Se rechaza la enmienda 45, del Grupo Popular.</i>	
		<i>Se rechaza la enmienda 46, del Grupo Popular.</i>	
		<i>Se aprueba el texto del dictamen.</i>	

	Página
Artículo 5.º	4147
<i>El señor Fernández-Piñar y Afán de Ribera da por defendida la enmienda 5, del Grupo Mixto.</i>	
<i>Se rechaza la enmienda 5, del Grupo Mixto.</i>	
<i>Se rechaza la enmienda 48, del Grupo Popular.</i>	
<i>Se aprueba el texto del dictamen.</i>	
	Página
Artículo 6.º	4147
<i>Se aprueba.</i>	
	Página
Artículo 7.º	4147
<i>El señor Ribas de Reyna defiende la enmienda 50, del Grupo Popular. Para turno en contra interviene el señor Campoamor Rodríguez.</i>	
<i>El señor Fernández-Piñar y Afán de Ribera da por defendida la enmienda 6, del Grupo Mixto.</i>	
<i>Se rechaza la enmienda 50, del Grupo Popular.</i>	
<i>Se rechaza la enmienda 6, del Grupo Mixto.</i>	
<i>Se aprueba el texto del dictamen.</i>	
	Página
Artículo 8.º	4148
<i>El señor Secretario primero (Rodríguez Pardo) da lectura de una enmienda transaccional.</i>	
<i>Se aprueba el artículo, con la modificación de la enmienda transaccional.</i>	
	Página
Disposiciones transitorias	4148
<i>Se aprueba la Disposición transitoria primera.</i>	
<i>El señor Bosque Hita defiende la enmienda 54, del Grupo Popular. Para turno en contra interviene el señor Campoamor Rodríguez.</i>	
<i>Se rechaza la enmienda 54, del Grupo Popular.</i>	
<i>Se aprueba la Disposición transitoria segunda.</i>	
	Página
Disposiciones adicionales primera, segunda y tercera. Disposición derogatoria y Disposiciones finales primera y segunda	4149
<i>Se aprueban.</i>	
<i>Se levanta la sesión.</i>	
<i>Era la una y cincuenta de la tarde.</i>	

Se abre la sesión a las diez y diez de la mañana.

DICTAMEN DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

— **PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE TIPIFICACION PENAL DE LA COLOCACION ILEGAL DE ESCUCHAS TELEFONICAS**

El señor PRESIDENTE: Buenos días. Ruego que ocupen sus escaños.

Continuamos con el apartado D) del punto quinto del orden del día. Corresponde la presentación del Dictamen por el Presidente de la Comisión.

El señor CARRETERO RUBIO: Hará la presentación la Senadora Clara Miranda.

El señor PRESIDENTE: La Senadora Miranda tiene la palabra.

La señora MIRANDA DE LAGE: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, la proposición de ley orgánica sobre tipificación penal de la colocación ilegal de escuchas telefónicas tuvo entrada en esta Cámara el pasado día 30 de junio. Dispuesta por la Mesa su remisión a la Comisión de Presidencia del Gobierno e Interior y declarada su tramitación de urgencia, al amparo de lo establecido en el artículo 135.1 del Reglamento del Senado, terminó el plazo para la presentación de enmiendas el día 4 de septiembre.

Esta proposición de ley consta de una exposición de motivos y un artículo único con dos preceptos para su inclusión en el Código Penal como artículos 192 bis y 497 bis.

La Comisión de Presidencia del Gobierno e Interior designó el día 6 de septiembre la Ponencia, que quedó integrada por los señores Senadores Carretero Rubio, Moreno Franco y Miranda de Lage, del Grupo Parlamentario Socialista, y Misol de la Iglesia y Jaramillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.

Reunida la Ponencia el mismo día 6 de septiembre, presentó su informe a la Comisión el día 11, informando sobre la no presentación de enmiendas a la exposición de motivos y la presentación de dos enmienda, una al precepto 192 bis y otra al 497 bis, por parte del Senador Fernández-Piñar y Afán de Ribera. La enmienda al precepto 192 bis, en la que se propone modificar la redacción del artículo, fue rechazada por unanimidad de la Ponencia, e igualmente fue rechazada por unanimidad la enmienda al artículo 497 bis, presentada por coherencia con la anterior.

Por su parte, la Comisión de Presidencia del Gobierno e Interior, oído el informe de la Ponencia, como se ha dicho, el 11 de septiembre, rechazó igualmente ambas enmienda con el único voto favorable del representante del Grupo Mixto, acordando por tanto aceptar como dic-

tamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor en el debate de totalidad? *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor Jaramillo.

El señor JARAMILLO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, voy a consumir este turno a favor de esta proposición de ley muy brevemente en nombre de mi Grupo, y ello precisamente porque, como se ha dicho por la Senadora que me ha precedido en el uso de la palabra en la tramitación de esta proposición de ley en esta Cámara ha quedado claro que la mayoría de los grupos políticos de la misma estamos de acuerdo en su texto tal y como nos ha venido del Congreso de los Diputados.

La inquietud generada en la opinión pública por las sospechas de que se pinchan los teléfonos, como vulgarmente se dice, es decir, que hay escuchas telefónicas que hieren indudablemente el derecho a la intimidad personal y familiar, el artículo 18.3 de la Constitución, que garantiza el derecho al secreto en las comunicaciones y que cita concretamente las telefónicas, y la falta de tipificación penal de las conductas que lesionan este derecho movieron al Grupo Parlamentario Popular del Congreso a presentar esta proposición de ley que, tramitada en el mismo, llega a este Pleno tal y como está publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», serie II, número 146, de 30 de junio de 1984.

Como también se ha dicho ya, consta de un solo artículo que incluye en el Código Penal, con la fórmula bis, hoy muy usual, y que evita precisamente el cambiar el articulado de nuestro Código punitivo, dos artículos, el 192 bis y el 497 bis, que a la vez incluyen dos preceptos que tipifican estas conductas antijurídicas y, aquí, en este caso, podemos decir con toda propiedad, anticonstitucionales. El primero tipifica esta conducta antijurídica cuando el sujeto activo está investido de funciones públicas. El segundo, el 497 bis, cuando se trata de un particular, introduciendo el elemento teleológico de que sea con la finalidad de descubrir los secretos o la intimidad de otro sin su consentimiento.

En ambos casos creo que se cumple la proporcionalidad de la pena que está señalada en los dos preceptos y por lo mismo mi Grupo va a votar sí a esta ley, porque la considera una perfecta ley. Indudablemente con ella, y por eso felicito con anticipación a la Cámara, vamos a profundizar en los derechos fundamentales que la Constitución reconoce, concretamente en el de la intimidad personal y familiar y, en definitiva —y lo digo con énfasis— en la libertad, que sinceramente y con todos los respetos, aunque algún Senador no quiera reconocerlo, y me refiero exclusivamente a uno, mi Grupo propugna con toda firmeza. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? *(Pausa.)*

¿Turno de Portavoces? *(Pausa.)* El señor Mison tiene la palabra.

El señor MISOL DE LA IGLESIA: Señor Presidente, señorías, muy brevemente, en representación del Grupo Parlamentario Popular, ante el proyecto de Ley Orgánica sobre tipificación ilegal de escuchas telefónicas, por la cual nuestro Grupo pretendía penalizar las escuchas telefónicas que atentaran contra el derecho a la intimidad que reconoce nuestra Constitución.

La vulneración de una serie de derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad o el derecho a la intimidad, como es el que nos ocupa en este momento, cuestionan la existencia misma de todo Estado de Derecho, por constituir todos ellos el armazón fundamental del orden jurídico político. Hoy existe una generalizada opinión de que esta vulneración se ha venido produciendo, por lo que se hace necesaria la tipificación de esta figura penal, y sería necesario que los poderes públicos adoptasen la actitud más firme para su persecución efectiva a fin de hacer desaparecer la generalizada sospecha de que, en definitiva, lo que logra es el debilitamiento de todos los supuestos del Estado de Derecho. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.

El señor CARRETERO RUBIO: Señor Presidente, señorías, para consumir un turno en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, turno que se puede expresar con nuestro total asentimiento con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en torno a la tipificación de la colocación de escuchas ilegales telefónicas.

Pero es necesario recordar aquí, en primer lugar, que el Grupo Socialista tuvo intención, así como el Gobierno, de tipificar este tipo de conductas ilícitas en el nuevo Código Penal. De todas maneras, presionado por un estado de opinión, por un síndrome de escuchas ilegales que se había producido recientemente, hemos considerado conveniente la aceptación de esta proposición de ley y, consecuentemente, otorgarla nuestro apoyo.

Esta proposición de ley ha sido mejorada tanto en Ponencia como en Comisión por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y es una proposición de ley que, a nuestro juicio, tiene tres importantes virtudes: primera, la intrínseca derivada de la propia proposición, o sea, se da un paso más en la necesaria prevención del derecho de la persona a la intimidad y al honor. La segunda virtud, a nuestro juicio, es que desde que esta proposición tuvo entrada en el Congreso de los Diputados desapareció por arte de magia el síndrome de las interferencias telefónicas. La tercera virtud es que, a partir de este momento, podríamos decir que esa falacia del rodillo socialista ha muerto, y ha muerto porque por primera vez desde 1977, por primera vez en nuestra reciente democracia, el Grupo mayoritario acepta, por ser coincidente con sus criterios, una proposición de ley dimanada de la

oposición; gentileza, señores Senadores, que no tuvo con nosotros el entonces partido mayoritario en nuestros años de oposición.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Vamos a votar la exposición de motivos que no tiene enmiendas.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 118; a favor, 117; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Entramos en la discusión del articulado. Su artículo único tiene dos enmiendas del Grupo Mixto.

El señor Fernández-Piñar tiene la palabra.

Artículo único El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: Gracias, señor Presidente, con su permiso defenderé las dos conjuntamente para abreviar.

Señorías, buenos días, con todo lo que se ha dicho aquí estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con que lo bueno es enemigo de lo mejor, y si esta proposición de ley puede aún mejorarse, yo creo que esa euforia con que se han manifestado desde esta tribuna los distintos portavoces podría tener aún más sentido, y no otra cosa que intentar mejorar aún más esta proposición de ley es lo que persiguen nuestras dos enmiendas.

Aprovecho la ocasión para decir que los Diputados comunistas en el Congreso también contribuyeron a mejorar el texto y, quizá, en algún aspecto sustantivo. No sólo lo hicieron los Diputados socialistas ni, evidentemente, los proponentes.

Yendo al grano, señorías, he de señalar que estamos ante el supuesto de violación de un derecho fundamental, el recogido en el artículo 18.3: «Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial». Así dice textualmente el artículo 18.3, y tras varias transaccionales presentadas en el Congreso, gran parte de este texto queda recogido hoy en la proposición de ley, salvo una única cuestión que motiva nuestra enmienda. Esa única cuestión es una excepción que se contiene en el texto del artículo 192 bis, una excepción a la intervención judicial. Nuestra opinión es que la intervención judicial es necesaria en todos los casos sin excepción. *(El señor Vicepresidente, Guerra Zunzunegui, ocupa la Presidencia.)* Por el contrario, a nuestro entender, en el artículo 192 bis se abre una salvedad para esta necesaria intervención judicial. Si me permiten les voy a leer el texto de este artículo: «La autoridad, funcionario público o agente de éstos que sin la debida autorización judicial, salvo, en su caso, lo previsto legalmente en desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución...». Es decir, que la expresión «salvo en su caso» excepciona la intervención judicial en los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución.

Este artículo 55 es el que se refiere a la suspensión de los derechos y libertades y en su número 2 se establece

que por ley orgánica podrán determinarse la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial los derechos reconocidos, entre otros, en el artículo 18.3 podrán ser suspendidos. Es decir, el texto del artículo 192 bis que se nos propone excepciona los casos del artículo 55.2 cuando vemos que ni el artículo 18.3, ni el 55.2 de la Constitución admiten ninguna excepción a la necesidad de intervención judicial previa a la escucha telefónica.

Esa expresión contenida en el artículo 192 bis que se nos propone es la que nos ha llevado a mantener aquí esta enmienda por la que, presentamos otro texto que, después de las transformaciones que sufrió la proposición inicial, viene a ser muy parecido salvo en lo que se refiere a esa expresión que excepciona los supuestos del artículo 55.2, no necesitando en esos casos la intervención judicial tal y como nosotros lo interpretamos. Por tanto, incluso sin aceptarse la enmienda que presento ante esta Cámara, simplemente con que se suprimiera esa alusión —en nuestra opinión no sólo innecesaria, sino perjudicial, que figura en el texto que se propone— al artículo 55 de la Constitución, el texto, desde nuestro punto de vista, quedaría perfecto.

La segunda enmienda hace referencia al artículo 497, no al 497 bis que aquí se plantea, sino al 497 del Código Penal en el que se hace mención a la violación de secretos. La intención que perseguimos con nuestra enmienda es que, habiendo en este artículo 497 del Código Penal un párrafo verdaderamente bárbaro, un párrafo verdaderamente injustificable, y dado que estamos aquí ampliando el tipo penal de la violación de secretos con una nueva especificación, la de la escucha telefónica, era nuestra opinión que podíamos y debíamos aprovechar esta ampliación del tipo penal de la violación de secretos para suprimir ese párrafo que, como decía, consideramos bárbaro, anticuado, obsoleto e injusto, y es el que se refiere a la posibilidad de que los padres y tutores puedan violentar la intimidad, puedan violar los secretos de los hijos o menores sometidos a su tutela. *(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)*

Pensamos que el posible argumento de contrario de que estamos ante una ley que tipifica las escuchas telefónicas y que, por tanto, la supresión de este párrafo, que no tiene relación con tales escuchas telefónicas, sería inadecuado, ese argumento debe de caer, nos parece, ante la oportunidad que se nos plantea de suprimir, en la misma tipificación penal, algo en lo que todo el mundo estamos de acuerdo que es obsoleto y que hay que suprimir.

En cuanto al problema de que la denominación de la proposición de ley no se adecuaría ya a su contenido, es cierto que en numerosas ocasiones hemos cambiado el título o la denominación de proposiciones o de proyectos de ley y que todos los días estamos aquí modificando preámbulos, títulos y hasta contenidos de las leyes mediante acuerdos transaccionales, y me parece que esos argumentos formales deberían de caer ante el argumento, en mi opinión de más peso, de que debemos aprovechar para cambiar esa injusticia, para suprimir ese párrafo absolutamente injusto para nuestros jóvenes funda-

mentalmente que se contiene en el actual artículo 497 del Código Penal.

Por lo demás, nuestro acuerdo con el resto de la proposición es completo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Carretero.

El señor CARRETERO RUBIO: Señor Presidente, señorías, en relación con las enmiendas presentadas por el señor Fernández-Piñar queremos puntualizar lo siguiente. Desde nuestro punto de vista, señoría, la enmienda presentada por usted en relación al párrafo tipificado como artículo 192 bis, lo único que pretende, ni más ni menos, es cargarse el artículo 5.º de la Ley Orgánica 11/1980, en el cual se dispone la intervención de teléfonos sin necesidad, efectivamente, de una orden judicial, sin un mandamiento judicial previo. Pero no es exacto tampoco porque esta intervención de los teléfonos, en este caso por parte de la autoridad gubernativa, Ministro del Interior o Director de la Seguridad del Estado, tiene que comunicarse inmediatamente por escrito motivado al juez, el cual se reserva, evidentemente, el derecho de confirmar esta intervención o no confirmarla.

Desde nuestro punto de vista, la Ley Orgánica 11/1980 es una ley que no nos gusta, igual que le pasa a usted; no nos gusta en absoluto, pero, desgraciadamente, esta ley, conocida como ley contraterrorista, es una ley en estos momentos todavía necesaria, y será necesaria en tanto en cuanto en este país se sigan cometiendo actos terroristas por parte de bandas armadas, por parte de todo tipo de terroristas y aceptar esta enmienda, para nosotros, supone, de alguna manera, dejar sin cobertura jurídica, en aras de la eficacia, a la autoridad gubernativa.

Creemos que el problema terrorista en España es tan grave que no nos podemos permitir el lujo de cesar en esta lucha sin guerra ni cuartel, tanto en el orden político como en el policial y en el jurídico.

- Respecto a su segunda enmienda, creemos, y casi lo ha dicho usted, que el tema de recoger también la violación de la correspondencia en esta proposición de Ley Orgánica está viciado, puesto que, efectivamente, los artículos 497 y 498 del Código Penal vigente ya tipifican este tipo de delitos. Pero es más: es que para aceptar esta enmienda creemos que se deberían de haber presentado otras enmiendas, tanto al preámbulo de la proposición de ley como al título, puesto que la denominación de la proposición de ley solamente es sobre tipificación penal de la colocación ilegal de escuchas telefónicas. Efectivamente, tal vez la actual redacción del Código Penal tenga algún párrafo, digamos, cuestionable, pero estamos convencidos de que cuando venga la redacción del Código Penal que se está elaborando en estos momentos, estos problemas, resquicios de un pasado poco afortunado, serán superados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el turno de portavoces tiene la palabra el señor Fernández-Piñar.

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: Gracias, señor Presidente.

Señor portavoz del Grupo mayoritario, efectivamente puede ser que si ustedes aceptaran esta enmienda primera pudiera verse afectado su planteamiento en el proyecto de ley sobre bandas terroristas, pero a mí me parece que lo que va a ocurrir, si ustedes no aceptan esta enmienda y siguen adelante con ese aspecto del proyecto de ley de bandas terroristas, es que ustedes pueden rozar la Constitución de una forma grave, porque lo que nuestra enmienda dice no es distinto de lo que dice la Constitución en su artículo 18, en el cual se dice que para los terroristas y para los no terroristas, ya que en esto tienen ustedes una visión que a veces distingue en exceso, y quiero recordar en este momento la Ley de Asistencia Letrada al Detenido. Yo les quiero recordar que en aquella ocasión también justificaban ustedes lo que en mi opinión personal era algo anticonstitucional, que era la excepción a los presuntos terroristas de la elección de abogado. Quiero recordarles que la Constitución está hecha para todos y que es con armas legales y constitucionales y no bordeando éstas en algunos puntos como se va a poder combatir eficazmente ese fenómeno.

El artículo 18.3 no deja lugar a dudas; dice que se garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. Y punto. El artículo 55.2, para suspender este derecho, exige la necesaria intervención judicial. Punto también. Es decir, si ustedes hacen una ley y rechazan una enmienda donde se recoge este criterio del artículo 18.3 y del 55.2, en el criterio de la Constitución de que para una escucha telefónica se hace necesario, imprescindible, para que sea legal y constitucional, la necesaria intervención judicial, si ustedes hacen esto, ustedes podrán argumentar la eficacia contra el terrorismo y mil cosas más, pero desde luego no estarán respetando escrupulosamente la Constitución, a mi juicio personal y al de mi partido. En consecuencia, el que yo les pida con esta enmienda que acepten la expresión misma de la Constitución mediante resolución judicial, no me parece que sea calificable como de imprudente ni de cualquier otra cosa.

En cuanto a la segunda enmienda, pretende suprimir ese párrafo del artículo 497, que hace referencia a algo que a la primera oportunidad que se tenga hay que suprimir, y esa primera oportunidad es ésta. Ese párrafo es el que permite violentar el secreto y la intimidad de los menores y de los hijos por sus padres o tutores, y eso es una salvajada, compañeros socialistas, y es algo que argumentos formales pueden dilatar su supresión en el tiempo. Podemos decir: bueno, esto cuando venga la reforma del Código Penal, etcétera. Pero si tenemos la oportunidad de oro en este momento, ¿para qué dejarlo para mañana cuando es una cosa que está clamando al cielo, valga la expresión? ¿Por qué no lo arreglamos hoy aquí, cuando al proyecto de ley que vamos a ver a conti-

nuación se le ha cambiado el título, la denominación, el preámbulo y todos los artículos? Y eso se puede hacer cuando ustedes nos están pidiendo aquí firmas para cambiar, mediante transacciones, en el mismo Pleno, multitud de cosas, incluso de contenido a veces importante, sin que se plantee ningún problema formal, porque el objetivo en este caso concreto justifica el medio de que entre todos, si estuviéramos todos de acuerdo, y creo que sí, en suprimir este párrafo tan obsoleto y tan bárbaro de admitir la violación de la intimidad y el secreto de los jóvenes, diéramos cauce y trámite a esa enmienda sin que hubiera ningún inconveniente formal para ello.

Yo creo que serán otras razones, porque las formales, en mi opinión, no justifican que perdamos esta oportunidad de oro para acabar con ese párrafo injusto del artículo 497.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro señor portavoz quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.)

El señor Carretero tiene la palabra.

El señor CARRETERO RUBIO: Señor Fernández-Piñar, es que usted nada más lee un pedacito de lo que dice el artículo 55.2 de la Constitución. Usted dice «Intervención judicial», y punto. Pero dice más. Dice que «el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos... pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas». Y se tiene que hacer por ley orgánica, y esa ley orgánica, que es, en definitiva, lo que se está debatiendo, una postura coherente con lo que ha mantenido siempre el partido comunista, y me parece muy bien, nada más que para nosotros no es de recibo esa ley orgánica; se ha publicado esa Ley 11/1980, e insisto que lo que pretende usted es que, ni más ni menos, deje sin efecto el artículo 5.º de esta ley tan importante para un éxito, dentro de lo que cabe, contra la lucha contra los elementos terroristas, porque, en definitiva, el artículo 5.º se ajusta perfectamente a lo que dispone este artículo de la Constitución, en su apartado segundo.

La intervención judicial queda garantizada porque solamente en casos muy excepcionales el Ministro del Interior o el Director de la Seguridad del Estado puede ordenar una intervención telefónica, comunicándosela inmediatamente al Juez, el cual confirmará o revocará la orden dada por el Ministro o el Director de la Seguridad del Estado, y se han revocado muchísimas órdenes en este sentido, como usted sabe, en estos tiempos.

Respecto a la segunda enmienda, mire usted, yo creo que la ley exclusivamente de lo que trata es de escuchas ilegales y no entra en el campo de la correspondencia, de las cartas, etcétera, ni tampoco en el campo de la imagen, que es un campo en el que posiblemente haya problemas a la hora de tipificar este delito, porque habría que empezar por definir qué es la imagen.

Yo le hago a usted una foto, que me llevo a mi casa. ¿Estoy vulnerando su intimidad, estoy vulnerando el derecho a su propia imagen? No lo sé; a lo mejor no; eso

habría que discutirlo y meterlo aquí, pero creemos que no es éste el sitio en estos momentos y creemos, además, que posiblemente el sitio adecuado sea el que vendrá en breve tiempo en el nuevo Código Penal.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 1, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 134; a favor, uno; en contra, 133.

El señor Presidente: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 2 del mismo Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 132; a favor, uno; en contra, 131.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, el artículo único del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 134; a favor, 133; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada definitivamente por la Cortes Generales la proposición de Ley Orgánica sobre tipificación penal de la colocación ilegal de escuchas telefónicas.

— DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY CON EL FIN DE QUE DESAPAREZCA LA DISCRIMINACION EN EL TRATO QUE RECIBEN POR LA LEY 46/1977, DE 15 DE OCTUBRE, LOS MILITARES PROFESIONALES DE LA REPUBLICA RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES COMPRENDIDOS EN DICHA LEY

El señor PRESIDENTE: Entramos en el apartado E), último del punto quinto el orden el día, que es la discusión del proyecto de ley con el fin de que desaparezca la discriminación en el trato que reciben los militares profesionales de la República respecto de los funcionarios civiles comprendidos en la Ley 46/1977.

Presentación del dictamen por el Presidente de la Comisión.

El señor CAMPOAMOR RODRIGUEZ: Yo mismo voy a presentar el dictamen, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: El Senador Campoamor tiene la palabra.

El señor CAMPOAMOR RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, tengo el honor de presentar el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre una proposición de

ley que partió del Grupo Socialista del Congreso con el fin de que desaparezca la discriminación en el trato que reciben por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, los militares profesionales de la República respecto de los funcionarios civiles comprendidos en dicha ley.

En mi opinión, realmente leyéndoles a ustedes el título que en el dictamen se propone para esta proposición de ley creo que podemos explicar cuál fue el proceso y cuál fueron las determinaciones de este dictamen, ya que este título es «proposición de ley de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República».

Indudablemente, el proceso de la Guerra Civil, su desenlace, las consecuencias posteriores han creado en todos los españoles, especialmente en este caso en el que tratamos, en los combates durante la guerra, una situación vamos a llamarla de discriminación.

Ya en el período preconstitucional, y luego a partir de la Constitución mucho más, que era nuestra obligación a partir de la Constitución de 1978, se intenta por las Cámaras aliviar esta situación de discriminación, y de ahí parte, como núcleo fundamental, la proposición de ley socialista.

Esta proposición de ley tuvo un proceso muy largo, como todos ustedes conocen, de debate y de reforma en el Congreso, con muchos avatares y con una terminación final a base de una enmienda «in voce» presentada por el Grupo Socialista que estableció una gran modificación y que a nosotros nos llegó con un texto que es el que nos remitieron con fecha 18 de julio de 1984.

A este texto se abrió un plazo de presentación de enmiendas; dicho plazo terminaba el día 6 de septiembre. Ese mismo día se presentaron 57 enmiendas, pertenecientes a todos los Grupos Parlamentarios, a excepción del Grupo de Senadores Nacionales Vascos, que no presentó ninguna enmienda. Presentaba Cataluña al Senado las enmiendas números de 7 a 13; el Grupo Mixto, las enmiendas números de 1 a 6; el Grupo Parlamentario Popular, las números de 37 a 57, y el Grupo Parlamentario Socialista, las números de 14 a 32.

Se reunió la Comisión para nombrar Ponencia para la calificación de estas enmiendas y emitir el correspondiente informe, y se nombró ponentes a los Senadores Pi-Sunyer, sustituido por Ferrer i Profitós, de Cataluña al Senado; Senador Bosque Hita, del Grupo Parlamentario Popular, y Senadores Martínón, Velilla y Campoamor, del Grupo Parlamentario Socialista. Se calificaron todas las enmiendas, se admitieron a votación y entregamos un informe, en el cual se aceptaban por mayoría las enmiendas del Grupo Socialista, y se rechazaron en su conjunto el resto de las enmiendas, también por mayoría.

Reunida la Comisión se estableció un debate, sobre todo se presentaron algunas enmiendas «in voce» por parte del Grupo Socialista mismo, y se llegó al dictamen que ahora proponemos, con lo cual quedan vivas todavía como votos particulares por parte del Grupo Mixto todas sus enmiendas presentadas, incluyendo además una en-

mienda «in voce» que se refiere al título de la ley o quizá al enunciado del título I de la ley. Los Senadores de Cataluña al Senado han mantenido como votos particulares las enmiendas 7, 8, 10 y 13, y los Senadores del Grupo Parlamentario Popular han mantenido como votos particulares las enmiendas 34, 35, 36 y 37, que fue defendida «in voce», la 41, también defendida «in voce», la 42, 45, 46, 48, 49, 50 y 54.

Quiero hacer constar que realmente, como he indicado al leer el título de la ley, en esta Cámara se han introducido sustanciales reformas a la proposición, tal como nos llegaba. Hemos contado con la colaboración de todos los Grupos para hacerla, aunque realmente con las discrepancias que corresponden, y realmente como punto fundamental tenemos que darle inclusión del Cuerpo de Carabineros, la supresión del término «vitalicio», con lo cual las pensiones se extienden a viudas y huérfanos, y realmente una concreción y una especificación más clara del tipo de pensiones que van a recibir y una determinación de los Grupos a los que atañe cada derecho y de los derechos correspondientes a cada Grupo.

Yo espero del debate en esta Cámara y en este Pleno la aprobación de esta ley que ha presentado como dictamen la Comisión de Presupuestos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campoamor.

Para turno a favor, el señor Prat tiene la palabra.

El señor PRAT GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, la modestia puede guardar muy profundo significado. He aquí que tenemos un dictamen de la Comisión de Presupuestos; parece un modesto trámite administrativo, la función inicial del Parlamento, apenas un episodio de la vida administrativa del país. Pero en este caso, el dictamen de la Comisión de Presupuestos tiene un profundo sentido humano, histórico y de futuro. Yo recuerdo —perdonad que, como viejo, los recuerdos me afloran constantemente— un discurso memorable de mi maestro Fernando de los Ríos sobre el Presupuesto de Instrucción Pública, y al terminar yo le dije: «Don Fernando, usted no ha hecho presupuestos, usted ha hecho poesía de un presupuesto». Hay algo de poesía, de profunda, significativa poesía, en esta proposición dictaminada por la Comisión de Presupuestos del Senado. Porque tiene un profundo sentido de historia y de futuro; de historia con esa lección suya que recoge con amplitud todos los episodios significativos de la vida colectiva, por pugnaces que sean. Aquella tremenda discordia de la Guerra del Peloponeso, en Historia de Tucídides, nos ofrece el panorama polémico y completo de la más ilustre civilización antigua, y es que la Historia es, por definición, síntesis y experiencia, con el valor ejemplar de su enseñanza. Aquí tratamos de recoger recuerdos de hace cuarenta años largos de la Historia dramática de España no para revivir rencores, sino para afirmar esperanzas. Por lo demás, entra en la tradición inmediata del Senado. Este Senado, que yo no sé si estaba ya en esta vieja casa o era huésped de la Carrera de San Jerónimo, el 17

de julio de 1977 aprobaba por aclamación una proposición de ley para buscar la reconciliación de los militares españoles. Y allí intervienen figuras, unas presentes, pero otras que viven en el recuerdo de todos, como Justino de Azcárate, como Satrústegui, como Villar Borda: que es el que presentó la proposición, y es acaso —y sin acaso— la primera proposición senatorial no de ley que ha surgido de este nuevo período de la Historia de España. Hace siete años, como si el número siete tuviera un cierto valor simbólico (estamos en el año del centenario del autor de las Siete Partidas), se deseaba una ley como ésta, que casi podemos compararla con la lenta elaboración de las Siete Partidas. Sí, han transcurrido ya siete años de aquella noble iniciativa.

Es una ley para viejos, y aquí entro yo por derecho propio; es para los viejos, pero ¡si vieran SS. SS. cómo renacemos de la vejez! Porque se vuelve, sin querer, al pasado, pero con la enseñanza dramática y noble de la Historia de nuestro país, con la enseñanza que a todos corresponde de sentirnos unidos entrañablemente a esta tierra, por encima de las discordias, en esta «triste y espaciosa España», según la frase de nuestro poeta clásico.

Es una ley para viejos, que van a rejuvenecer ahora por unos instantes con una ley que no va a ser perfecta, pero que puede ser perfectible. Y permitidme que cite aquí también a otro ilustre personaje que significó la unidad de todos los españoles en los momentos más dramáticos: me refiero a Julián Besteiro. Julián Besteiro hablaba de la Ley fundamental, y decía: «No hagamos una ley perfecta, hagamos una ley perfectible». Y yo creo que esta ley, que es imperfecta, puede ser una ley perfectible. Es muy difícil tratar de coger cuarenta años de Historia y proyectarlos hacia el presente, y hacia el futuro en una síntesis de creación, de paz y de amistad, pero no es imposible; no es imposible porque en el fondo de aquellas discordias late una rectitud de conciencia, porque cada uno defendía lo que consideraba esencial en su visión de la Patria, con el riesgo de su vida, y eso es profundamente respetable, por dramático que sea.

Acaso sea la última guerra ideológica. Yo no quiero, no quería y no querré jamás para mi país las discordias fraternas, ni para la Humanidad, porque, ¿acaso no son guerras civiles todas las guerras entre los hombres? ¿No hay una unidad esencial del género humano? Y, sin embargo, aconteció, y lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos, al cabo de los años, restaurar y alentar a los que pueden considerarse más dañados por un proceso histórico, que no voy a juzgar, pero que ahí queda, y queda para lección de todos.

Creo, por tanto, que esta ley perfectible es una ley útil. No es posible alcanzar una solución que a todos satisfaga, pero sí tenemos el deber de buscar en la equidad los suficientes recursos para empezar en este camino que inició la proposición no de ley senatorial del año 1977.

Eso ya no es cuestión de recursos; en el fondo, se trata más de principios morales que de una concesión económica. Y nunca la Comisión de Presupuestos como ahora obedece a este profundo sentido creador que tiene la Ad-

ministración de un Estado cuando sirve ideales y sentimientos tan nobles.

Esta Comisión de Presupuestos ofrece unas modestas pensiones, unas pensiones mínimas; ofrece un reconocimiento de servicios; ofrece la concesión de pensiones de viudedad y orfandad; ofrece asistencia sanitaria; pero ofrece, sobre todo, la restitución que hace la Patria española a un conjunto de sus hijos que sacrificaron su ideal, su vida y su esperanza en la defensa de las ideas que creían más justas para el porvenir de España. (*Grandes aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Ruego a los asistentes en la tribuna pública que se abstengan de hacer manifestaciones de agrado o desagrado, porque si no esta Presidencia, en cumplimiento del deber que le impone el Reglamento, se verá obligada a ordenar su desalojo.

¿Turno en contra? (*Pausa.*) ¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

El señor Pozueta tiene la palabra.

El señor POZUETA MATE: Gracias, señor Presidente, señorías. Después de la lección magistral del Senador Prat, una breve intervención para exponer la posición del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Este proyecto de ley trata de salvar una situación concreta: la discriminación padecida por un colectivo de militares profesionales. No trata, por tanto, de resolver ni de superar el cúmulo de calamidades que una guerra civil conlleva, y probablemente esto nunca lo podremos hacer. Solamente pretende, repito, corregir una injusticia histórica, porque no podemos olvidar, señorías, que la discriminación se produjo hace más de cuarenta años con una legislación que premió a los vencedores y castigó a los vencidos. En este contexto, el legislador pretende ahora reparar ese cúmulo de vejaciones, de humillaciones, de deshones que el colectivo a que afectó ha padecido. Y ante este objetivo, como no podía ser menos, nuestro Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos va a apoyar el proyecto y lo va a votar favorablemente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pozueta.

El señor Ferrer i Profitós tiene la palabra.

El señor FERRER I PROFITOS: Señor Presidente, señorías. Nuestro Grupo, y yo personalmente, pasamos al debate de esta ley —como decía el Senador Prat muy exactamente— para, desde la concordia, secundar la discordia y, desde un punto de vista de olvido, poder restaurar las heridas que unos hechos históricos hicieron en la sociedad española.

Los militares de la República sufren hasta la fecha una doble discriminación. Por una parte, las dos primeras normas legales sobre amnistía, 10/1976 y 46/1977, determinaron para los funcionarios civiles del Estado republicano la anulación de todas las penas principales y acce-

sorias que les fueron impuestas al terminar la guerra civil.

Por esa modificación política se restituyeron los derechos pasivos y activos derivados de su acción funcional y se reincorporaron a los servicios activos en la Función Pública, hecho éste muy importante. En tanto que a los militares les mantuvieron en vigor penas accesorias de separación del servicio, que los impidió no solamente la reincorporación al servicio activo en sus carreras, sino a pasar de pleno derecho a la situación legal de militar retirado, reconociéndoles tan sólo el derecho a percibir una pensión.

Ninguna de las disposiciones sobre amnistía para los funcionarios civiles se les aplicaron a los militares, mientras que a aquéllos les fueron reconocidos todos sus títulos, nombramientos y empleo concedidos por el Gobierno de la República entre el referido 18 de julio de 1936 y 1 de abril de 1939.

La discriminación se produciría porque, aunque delimitásemos correctamente el colectivo, la legislación vigente, en concreto el Decreto-ley de 1978, que reconoce el empleo de militares de la República tan sólo a efectos de señalamiento de pensiones, no les da otra serie de garantías que, sin embargo, se han reconocido a los funcionarios civiles.

En términos similares, se expresaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, y lo mismo que yo he manifestado lo decía el señor Ministro de Defensa apoyando una interpelación del Grupo de Minoría Catalana, hermano del nuestro, defendida por el Diputado señor Molins. Dicho portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados durante aquella sesión decía que estas dos discriminaciones constituyen una grave injusticia que no cabe duda es preciso reparar, y que trata de resolver la proposición de ley que con dicha fecha presentaba el Grupo Parlamentario Socialista, y que tal como ratificaba el Gobierno, merece el apoyo del Ejecutivo. Esto lo dijo el señor Ministro en esta fecha en el Congreso de los Diputados.

El Ministro de Defensa anunciaba en esta misma sesión parlamentaria la intención del Gobierno de dar su apoyo a la proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista, expresándose con estas palabras: «El Gobierno tiene pensado precisamente dar el apoyo a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que intenta resolver los dos tipos de discriminación. Primero, yendo a la definición del militar profesional y no a la delimitación de una fecha, como es la del 18 de julio. Segundo, considerando que los militares que se han definido profesionalmente y no en función de una fecha se reincorporen a la situación de retirados».

La proposición de ley que en esta misma fecha del 28 de junio de 1983 presentaba el Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, resolvía con su texto inicial las dos discriminaciones que padecen los militares de la República en su ámbito de aplicación, incluidos no sólo los militares profesionales anteriores al 18 de julio de 1936, sino que en el artículo 1.º se hacía extensivo, y leo textualmente: «Los militares que con posterioridad al 18

de julio de 1936 y antes del 1.º de abril de 1939 hubieren ingresado con carácter definitivo en las Fuerzas Armadas de la República y les hubieran sido concedidos sus empleos con carácter efectivo y no en campaña». A todos ellos, militares profesionales ingresados tanto antes como después del 18 de julio de 1936, se les concedía sin ningún tipo de discriminación el pase a la situación de retirado con todos los derechos inherentes a la misma.

Sin embargo, posteriormente, la proposición de ley fue objeto de enmiendas por parte del Grupo proponente, el Grupo Socialista, el cual, mediante una enmienda «in voce» presentada en el último momento, introdujo un Título II, volviendo a establecer la diferenciación entre militares, según que hubiesen ingresado en las Fuerzas Armadas de la República antes o después del 18 de julio de 1936, contradiciendo así las palabras pronunciadas por el Ministro de Defensa y por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.

En nuestra opinión, el texto actual hace caso omiso de los dictámenes emitidos al respecto por órganos consultivos del Estado, como es la Dirección General de lo Contencioso del Estado, que, en su dictamen de 23 de noviembre de 1982, después de un largo análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se manifestaba en los siguientes términos: «A la luz de esta doctrina, y de cuanto se viene exponiendo, considera este centro directivo que, en principio, carece de justificación razonable la discriminación que introduce el Real Decreto 6/1978 entre los militares profesionales, según hayan adquirido tal condición antes o después del 18 de julio de 1936».

Esta es la segunda conclusión de las afirmaciones anteriormente expuestas acerca de la finalidad y naturaleza de la legislación de amnistía de esta clase, cuyo presupuesto conceptual es la rehabilitación de situaciones producidas al amparo de la legalidad de la República. Al ser esto así, resulta claro que, si la ruptura del ordenamiento no puede ser relevante jurídicamente a los efectos de concesión de beneficios de amnistía, mucho menos puede serlo una diferenciación que separe la legalidad de la República, a cuyo amparo nacieron derechos que hoy se pretenden dotar de efectos en dos momentos: uno anterior al 18 de julio de 1936, y otro posterior a él. La legalidad de la República sigue siendo la misma, careciendo de justificación objetiva la discriminación que opera el Real Decreto-ley en tal sentido, discriminación que, primero, no es objetiva ni razonable, y segundo, no guarda ninguna proporción con la finalidad de ésta, incluso podría llegar a infringir el artículo 14 de la Constitución.

Por todo ello, la Dirección General de lo Contencioso del Estado concluye: «Este centro directivo aconseja que se elabore y tramite la norma correspondiente a los efectos de modificar el Real Decreto-ley 6/1978 y evitar una posible declaración de inconstitucionalidad del mismo, con supresión de la referencia a la fecha del 18 de julio de 1936, requisito discriminatorio a los efectos de los beneficios que en él se conceden».

Pues bien, nada de cuanto se dice y propone en este dictamen se respeta en el texto actual de la proposición

de ley, ni incluso con las enmiendas que se han incorporado a la misma por el Grupo Socialista, que continúan estableciendo diferenciaciones entre militares profesionales ingresados antes del 18 de julio de 1936, a los que dedica el Título I, concediéndoles el pase con pleno derecho a la situación legal de retirado con el empleo que les correspondiera de haber continuado en servicio activo, y los que lo hicieron después de esta fecha, a quienes únicamente se les concede un reconocimiento de servicios prestados, dándoles derecho a unas distinciones, que no son el pase a la situación de retirado, y a percibir la pensión mínima de la Seguridad Social, sujeta a las incompatibilidades que reglamentariamente se determinen, y asimismo a recibir la asistencia sanitaria a cargo de la misma.

Con ello se discrimina nuevamente a los militares profesionales ingresados en las Fuerzas Armadas de la República con posterioridad al 18 de julio de 1936 y no se respetan, a nuestro juicio, los considerandos de la Sentencia de 20 de junio de 1983 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional recaída sobre el recurso de amparo 500/82. Dicha Sentencia desestimó el referido recurso de amparo, pero lo hizo porque el Tribunal consideró que la solución a los problemas de los militares de la República —decía textualmente— no puede venir ni por el camino de invalidar normas ni por el de extender el régimen de los funcionarios civiles a los militares, porque en esta extensión faltaría la precisión del ámbito personal de los favorecidos por la norma y la definición de los efectos de la amnistía, de modo que sólo el legislador, desde la igualdad, podrá integrar el derecho que permita en cada caso la aplicación de la amnistía.

El Tribunal Constitucional no desestimó el recurso, como en alguna intervención del Congreso de los Diputados se ha dicho, porque las razones que se invocaban no pueden ser alegadas en un recurso de amparo (en este caso hubiera declarado inadmisibile el recurso y no lo hizo), sino que, por las razones arriba indicadas, estimó que se hacía preciso la promulgación de una ley. Pero el Tribunal Constitucional hizo algo más: le indicó al legislador cómo debía conceder la amnistía a los militares. Lo primero que hizo fue recordarle que él también está sujeto al principio de igualdad.

Empieza el Tribunal por reconocer que las leyes...

El señor PRESIDENTE: Ruego al señor Ferrer que abrevie, porque ya ha transcurrido su tiempo.

El señor FERRER I PROFITOS: Lo voy a hacer, señor Presidente.

Empieza el Tribunal Constitucional por reconocer que las leyes sobre amnistía hasta ahora vigentes conceden ésta de forma desigual a militares y civiles, y tras analizar si entre la función pública militar y la civil existen elementos diferenciadores que pudieran reclamar módulos distintos de los efectos de la amnistía, llega a la conclusión de que efectivamente existen, pero que estos elementos diferenciadores donde únicamente pueden proyectarse es en la cuestión de la reincorporación al

servicio activo, ya que para todo los demás las situaciones se presentan como afines y, desde luego, desde la razón a que obedece la amnistía, como iguales, sin que el elemento civil o militar actúe como diferenciador.

Dentro de este marco constitucional esto parece que queda claro, tanto por lo que dice el Tribunal Constitucional como el órgano contencioso del Estado que declara que la legislación de la República pone de manifiesto, sin dar lugar a la menor duda, quiénes son los profesionales que tienen que tener esta consideración: los ingresados como profesionales entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. Primero, el personal que hallándose en situación de retiro o reserva el 17 de julio de 1936 se incorporó voluntariamente al servicio activo. Segundo, el personal que hubiera ingresado en las Fuerzas Armadas antes del 18 de julio de 1936 o hubiera solicitado la situación de reenganche. Tercero, oficiales, suboficiales, pilotos y demás especialistas ingresados en el Arma de Aviación.

Basta un simple examen de las órdenes de convocatoria para ver que en el Arma de Aviación los empleos fueron concedidos con carácter efectivo y no provisional. Y por si lo anterior no bastara, en mayo de 1937 fue publicado un Real Decreto de 14 de dicho mes, por el que se creó el Arma de Aviación, en cuya exposición de motivos se decía bien claramente: «No se va a la nueva organización pensando solamente en las exigencias de la lucha actual, aunque ellas por sí solas bastarían para justificarla, sino atalayando también el porvenir».

El nuevo Arma se constituye mediante la fusión de la antigua aviación militar del Ejército de Tierra, la Aeronáutica naval, la civil y la defensa especial contra aeronaves. Se constituyó en tres cuerpos: General de Aviación, Auxiliares de Aviación y Maestranza.

El señor PRESIDENTE: Señor Ferrer, se separa usted del tema y ya ha consumido cuatro minutos más del tiempo reglamentario.

El señor FERRER I PROFITOS: Por todo ello, nuestro Grupo ha presentado sus enmiendas. Luego, en el turno de defensa de las mismas iré concluyendo la intervención que usted, por pasarme del tiempo, no me ha dejado terminar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ferrer.

El señor Fernández-Piñar tiene la palabra.

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: Gracias, señor Presidente. Señorías, quiero empezar diciéndoles que comparto plenamente las palabras y lo que hay detrás de ellas que pronunció el Senador Prat, a quien admiro. Añadir que yo soy miembro de un Partido, el Partido Comunista de España, que junto con otros Partidos y organizaciones ha sufrido en la historia sobre la que estamos tratando y ha aportado, creemos, su grano de arena para que esa historia no vuelva a repetirse.

Yo quiero recordarles que en el año 1956 el Partido al que pertenezco formuló lo que llamamos la política de

reconciliación nacional, y no para olvidar, como a veces se dice, porque yo pienso que el olvido de lo ocurrido no es bueno. Alguien dijo por ahí que los pueblos que olvidan su historia o su pasado se arriesgan a vivirla de nuevo. No es el olvido lo que hay que aplicar a nuestra historia, sino la reconciliación, la reparación, precisamente para que no haya ocasión de que se repitan tragedias como la de nuestra contienda nacional.

La proposición sobre la que hoy tratamos es un intento, sin duda, de reparar esa discriminación. Decía el senador Prat que esta es una ley para viejos. Yo creo que no, que fundamentalmente es una ley para jóvenes y para el futuro. Porque sólo si de verdad conseguimos hasta el máximo de lo posible (y hay un máximo posible), reparar con generosidad la discriminación por parte de unos y otros, podremos construir un futuro donde esa posibilidad de repetirse estos hechos no tenga opción. Esta proposición de ley es un intento, aunque en nuestra opinión desgraciadamente se queda a medio camino. Y esto lo prueba el mismo hecho de que el Grupo Parlamentario mayoritario en un, creo yo, intento de coherencia, se ha visto en la obligación de cambiar el propio título, la denominación de la proposición de ley, que habla, como SS. SS. recordarán, de la superación de la discriminación. Porque en su fuero interno el Grupo mayoritario reconoce que la discriminación no se supera totalmente. ¿Cuáles son las razones? Ese es secreto del sumario socialista. Lo cierto es que había una discriminación con los militares profesionales de la República en relación con los funcionarios civiles, y esa discriminación, parcialmente, se mantiene.

El hecho de que haya un tratamiento diferente para los militares profesionales al servicio de la República que adquirieron tal condición con anterioridad al 18 de julio de 1936 en relación con los que adquirieron esa condición con posterioridad cuando para los funcionarios civiles no hay esa diferenciación en ningún caso no es justo. El que se mantenga esa diferenciación en el trato, título I para unos, título II para otros, nos parece que es incomprendible. Yo no lo entiendo, sobre todo cuando la proposición inicial del Grupo Socialista superaba esa discriminación.

Además, como ha dicho aquí el Senador que me ha precedido en el uso de la palabra, el Ministro señor Serra habló muy claramente de que esa discriminación era injustificable, que había que superarla. De ahí la proposición socialista, toda vez que su portavoz, en el Congreso de los Diputados el año pasado, hablaba de que esto era una injusticia intolerable y por eso se apoyaba dicha proposición.

¿Por qué la han cambiado ustedes y cometen un injusticia intolerable en opinión de su portavoz en el Congreso el año pasado? ¿Por qué mantienen un trato distinto para los militares, según una fecha, cuando los argumentos de su portavoz y del Ministro de Defensa contradicen lo que ustedes ahora han dejado en el texto?

No lo entiendo. No sé que razones tienen, porque las presupuestarias o económicas me parece que no son de recibo en esta ocasión por lo pequeño de su cuantía, ya

que, como decía, el tema que estamos tratando tiene un carácter simbólico de principios morales.

La Dirección General de lo Contencioso, como se ha leído antes, califica de inconstitucional este asunto, porque atenta contra el artículo 14, que habla de la igualdad de los españoles. El Tribunal Constitucional, en ese recurso de amparo, rechaza el recurso, pero no los argumentos en que se apoyan los recurrentes para reclamar contra esa diferenciación. El Tribunal Constitucional reconoce, igualmente, que la fecha no es en absoluto motivo para discriminar una y otra situación de los profesionales de la República.

Si el Tribunal Constitucional, si la Dirección General de lo Contencioso-administrativo en su dictamen, si su portavoz socialista en el Congreso, si su Ministro, si todos coinciden en la misma opinión, ¿cuáles son las razones para que no hayan ido donde podían y debían llegar?

El Senador Prat finalmente y con buen criterio ha dicho que esta ley es perfectible. Todas las leyes son perfectibles y es bueno que los sean, pero es bueno también que las perfeccionemos al máximo en el momento en que tenemos oportunidad de hacerlo. No vale argumentar que porque una ley es perfectible no la perfeccionamos ahora, la dejamos para mañana; no. Que sea perfectible porque hemos llegado al máximo de lo que hoy podemos, y hoy podemos ir mucho más allá de donde ustedes han ido. Esa es mi humilde opinión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández-Piñar.

Como portavoz del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bosque Hita.

El señor BOSQUE HITA: Señor Presidente, señorías, por encargo de mi Grupo Parlamentario subo a esta Tribuna para utilizar el turno de portavoces en relación con esta proposición de ley socialista.

Subo personalmente con emoción, y hubiera querido subir también con ilusión. Y subo con emoción porque este es un tema en el que muchos de los que estamos aquí presentes sabemos hasta qué punto, durante cuatro años de mi vida, he entregado muchas de mis ilusiones para encontrar una fórmula justa y completa para todos. Se puede comprender entonces el porqué la emoción no va acompañada de ilusión, porque esta proposición de ley es corta, es cicatera, es incompleta, es partidista y no resuelve definitivamente el problema del entendimiento entre los que lucharon en aquella guerra civil.

Durante la legislatura pasada, ya que no antes, debió haber quedado perfectamente resuelto. Yo creo que la cobardía de quienes entonces gobernaban y la utilización partidista del tema por quienes entonces estaban en la oposición, hicieron imposible que pudiera encontrarse la fórmula para resolverlo adecuadamente, y estuvimos a lo largo de aquellos cuatro años muy cerca de que pudiera ser conseguido.

Esta proposición de ley (que debiera ser proyecto de ley, porque esto es una cuestión de Estado, no una cues-

ción de partido), viene aquí en un momento determinado después de haber sido presentada hace más de un año en el Congreso de los Diputados, y no la presentó el Gobierno, el Gobierno no debía tener las ideas muy claras o no debía tener el valor suficiente para afrontar el problema, lo hace el Partido Socialista, y lo hace en unos términos que parcialmente eran más amplios de los que en este momento vamos a contemplar aquí. Y valga esto de parcialmente más amplios, porque desde el primer instante nació con un sentido de partido exclusivamente, no con un sentido de Estado.

Se adormece durante muchísimos meses, queda hibernada hasta que en febrero o marzo del año siguiente, en un debate de totalidad en el Congreso de los Diputados, aparece algo distinto de lo que se había presentado, se refería exclusivamente a aquéllos que eran profesionales, a quienes lucharon en la filas del Ejército que estaba bajo la autoridad del Gobierno de la República.

Entonces, en aquel debate de totalidad, aquella proposición de ley se aprueba para hibernarse durante unos meses, y aparecer después en una Ponencia radicalmente distinta, y posteriormente en una Comisión con capacidad legislativa plena, en la que en los últimos instantes de nuevo reaparece la contemplación de quienes en un solo bando habían tenido responsabilidad de mando a lo largo de la guerra civil.

Pasa el tiempo, viene aquí, aún no está satisfecho el partido socialista de todas estas constantes modificaciones, cambia de criterio sobre la proposición de ley y nos aparece con 19 enmiendas nuevas. Posteriormente esas 19 enmiendas son enmendadas todavía más en Comisión y en Ponencia. Es decir, la fijeza, la claridad, lo que se quería obtener con esta proposición de ley no queda en ningún momento claro, tanto es así que yo pienso que cuando esto salga definitivamente del Congreso de los Diputados, seguramente tendrá bastantes diferencias con el texto que estamos contemplando en estos momentos.

Señores, cuando se presenta una proposición de ley hay que tener muy claro lo que se quiere y lo que se busca. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señores Senadores.

El señor BOSQUE HITA: ¿Cómo debió hacerse? Pues, naturalmente, con sentido de Estado, generalizando para todos. Había que cerrar la guerra civil, y la guerra civil se cierra solamente apoyándonos en la Constitución, y la Constitución, desde el día en que se aprobó, establece que, a partir de ese momento, todos los españoles son iguales ante la ley y que todos los españoles tiene que tener la misma clase de tratamiento y consideración.

No se puede olvidar, como decía el señor Fernández Piñar, el pasado ni la Historia, pero la Historia nos tiene que servir para aprender y para superarla.

En esta Cámara he oído a don José, a quien respeto profundísimamente, porque hemos sido compañeros en este trabajo por conseguir solucionar este problema y

por otras muchas razones, y he oído aquí hablar de reconciliación, y he oído hablar de hacer algo totalizador y superador, y he oído aquí hablar de que esto tenga valor futuro. ¡Pero si no puede tenerlo! ¡Si nace con plomo en las alas! Y he oído aquí hablar de que no se podía ir a la ley perfecta, sí a la ley perfectible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a tener que esperar nuevas proposiciones de ley o nuevos proyectos de ley para poder hacer frente de verdad a la ley que resuelva definitivamente este problema?

Se trata de principios morales, señores, no económicos. Tanto es así que en ningún momento de su trámite desde la presentación de la proposición de ley se ha cumplido ni uno solo de los planteamientos reglamentarios de ninguna de las Cámaras en relación con el coste de las proposiciones o de los proyectos de ley. Nadie ha pedido una Memoria económica. Nadie ha planteado aquí nada sobre estas modificaciones constantes. Nadie ha pedido cuál era la repercusión y los efectos de esto. ¿Por qué? Porque todos entendemos que no es un problema económico, que está por encima de los económico.

Quiero recordar a SS. SS. en estos momentos lo que, por ejemplo, decía el Diputado, señor Busquet, el día del debate de totalidad en el Congreso de los Diputados de este proyecto de ley. Decía: «Nosotros limitamos nuestra proposición de ley a los militares profesionales...». (Estaban tratando aquel primer tema.) «... Y en esto no creamos agravio para con nadie, porque a quienes eran militares profesionales en el otro lado también se les pagan pensiones. Habría agravio si nosotros pagásemos pensiones a los que no fueron militares profesionales, pero la proposición de ley dice claramente que es para quienes entraron con carácter efectivo y profesional, es decir, para siempre, no sólo para la campaña. Por tanto, no puede sentirse agraviado quien fuese oficial provisional si tampoco se paga a quien fue solamente oficial de campaña...», etcétera.

Asimismo puedo leer lo que decía el señor Fernández Inguanzo en la Comisión, minutos antes de que se presentase ese cambio completo entre el texto que se elaboró en ponencia y lo que salió del Congreso de los Diputados. Decía el señor Fernández Inguanzo del Partido Comunista: «Es sabido que nosotros los comunistas hemos formulado la política de reconciliación nacional, hemos defendido y defendemos abierta y públicamente la nueva situación vigente en la Constitución española. Ahora, nosotros consideramos que la reconciliación nacional tiene como principio fundamental terminar con la discriminación que ha producido la guerra, con la frontera que la guerra ha establecido entre españoles y, como dije inicialmente, nosotros tratamos de que esta proposición de ley sea un punto de partida precisamente para terminar con esas discriminaciones. Ello no se produce, porque la terminación de la discriminación pasa, en nuestra opinión, por el reconocimiento de los derechos de todos los militares, hayan luchado en un campo o en otro. Estoy seguro de que todos ellos creían que luchaban por el bien de nuestro país. Por tanto, nosotros consideramos que tienen el mismo derecho. Otra cosa es lo que determine

la edad...», etcétera. «Los que han luchado en un campo como los que han luchado en el otro...», etcétera.

Veán ustedes, señorías, cómo los propósitos de todos en estos momentos determinados fueron, de verdad, superadores de la contienda, pero ello no se consigue con esta proposición de ley. Mi grupo va a estar con ella, va a hacer posible que salga aprobada porque cree que es de justicia, aunque nada más sea para una parte de los españoles.

Quiero que quede absoluta constancia ante todos los que estamos aquí presentes, ante quienes van a ser directamente afectados, ante quienes nos están escuchando, que en estos momentos, les puedo asegurar a ustedes, Grupo Socialista, que en lo profundo de su satisfacción por el momento que están viviendo hay un profundo sentido de amargura, y tengo testimonio de ello, porque no se comprende a todos los españoles que lucharon en aquella guerra civil. Creo que debiera haberse hecho el esfuerzo, por parte de todos, para que esta guerra civil quedara de verdad en la memoria, para aprendizaje de todos, pero no dividiendo todavía en bandos distintos. Si en un momento determinado, unos pudieron tener una serie de privilegios por el hecho de haber ganado la guerra, la Constitución, repito, borra todas las diferencias y nos coloca a todos en el mismo plano de igualdad. Si no queremos superar aquella guerra civil, si queremos seguir todavía planteando los problemas de bandos, de unos o de otros, entonces, señores, vayamos a sacar adelante esta proposición de ley como ustedes quieren que salga, pero yo, de alguna manera, en nombre de mi Grupo, tengo la esperanza de que ustedes, en estos momentos, pidan que se suspenda la sesión por el tiempo preciso para que pueda existir una negociación y llegar a una transaccional que resuelva de verdad este problema de la guerra civil. Si no, es que falta sentido de Estado.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Laborda Martín. (*El señor Vicepresidente, Lizón Giner, ocupa la Presidencia.*)

El señor LABORDA MARTÍN: Señor Presidente, señorías, en el turno de portavoces, como es costumbre, responderé de manera genérica, pero haciendo algunas referencias, a cada uno de los intervinientes.

De las intervenciones del Senador Ferrer y del Senador Pozueta hago una distinción. Ambos Grupos tienen una similitud desde el punto de vista ideológico —Grupos nacionalistas ambos—; tal vez sea el carácter más histórico del Grupo que representa el Senador Pozueta el que nos permita explicar la comprensión que ese Grupo tiene respecto de esta proposición de ley y nos permita entender, yo diría, el carácter poco afortunado —lo digo con todos los respetos, Senador Ferrer— de su intervención. Pero, en cualquier caso, su intervención me va a permitir, enlazándola también con la del Senador Fernández-Piñar y Afán de Ribera, hacer algunas precisiones sobre el carácter y la voluntad que tiene esta proposición de ley.

Yo creo que para nosotros, legisladores, no es una fuen-

te de inspiración, y mucho menos un mandato, una Resolución de la Dirección General de lo Contencioso del Estado. ¡Buenos estaríamos! No es bueno que, cuando una resolución de un organismo administrativo puede resultar satisfactoria, hagamos caso. Lo natural, sobre todo, tratándose de órganos administrativos muy ligados a los problemas económicos, es que ese tipo de mandatos sean bastante restrictivos, pero, en cualquier caso, y como ha señalado perfectamente el Tribunal Constitucional, precisamente en los fundamentos del recurso de amparo rechazado a que ambos Senadores han hecho referencia, este problema, es decir, la delimitación de los derechos, la delimitación, incluso, de las prestaciones económicas, todo lo que pueda poner fin a la discriminación en la que se fundamentaban los recurrentes, es competencia de las Cortes Generales. De ahí que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de amparo; de ahí que se hiciera una remisión a la voluntad de las Cortes Generales. Y tengo delante de mis ojos el texto literal de uno de los fundamentos para rechazar ese recurso de amparo que interpuso la Asociación que ustedes conocen, y en dicho fundamento se dice que la eficacia de los nombramientos militares durante el período de la guerra civil —en el fundamento anterior se ha señalado que los mismos no tienen efectos en el actual ordenamiento jurídico— es competencia del propio legislador mediante la promulgación de nuevas normas, y dentro de lo que el legislador, en una consideración de los variados supuestos de guerra, estime sobre cuáles son los que reúnen unas condiciones que los equiparan a los militares ingresados en las Fuerzas Armadas con anterioridad a la guerra civil. Es decir, este texto, esta proposición de ley, que evidentemente ha experimentado modificaciones, que ha tenido, como no podía ser menos, una tramitación pausada, porque era necesario reflexionar, en primer lugar, debo decir que no es ni ha pretendido ser jamás una ley de pensiones de guerra.

Es una ley que, en principio, tenía previsto solucionar, mediante su definición, los derechos que les correspondieran a aquellos militares al servicio de la República que tenían carácter profesional, pero también es verdad que nosotros no quisimos, a la vista de esa revelación tan clara, cuando se trata de ese drama que tan magníficamente aquí ha evocado el Senador Prat, que es el combate, el combate en defensa no solamente de una legalidad, sino de unas profundas convicciones, el combate además con carácter voluntario (porque muchos o la totalidad de los que están recogidos en el Título II de la ley fueron hombres que empuñaron voluntariamente las armas en defensa de unas convicciones), que ese grupo, que era tan combatiente como el profesional funcionario, que se expuso lo mismo que él, que murieron y que cayeron heridos exactamente igual que él, quedara evidentemente fuera de esta voluntad de reparar una discriminación como se pretende en este texto legal.

Pero evidentemente, al ampliar el abanico de aquellos posibles beneficiarios, con la limitación de que esto no puede ser una ley de pensiones de guerra, porque no hay recursos económicos, también hay que pensar que, a ve-

ces, es una pura casualidad el que ese combatiente que defendió sus convicciones no alcanzara el grado de suboficial, pero, sin embargo, era un soldado como el suboficial o el oficial. A ese combatiente ¿por qué no reconocerle esos derechos, desde el punto de vista de nuestra voluntad? ¿Por qué no reconocerle lo que evidentemente tenemos que reconocer y reconocemos, yo diría más que en el propio texto de la ley, como se ha reconocido en el Congreso y se está reconociendo esta mañana aquí con las intervenciones de los distintos portavoces, eso que ha sido una historia aleccionadora para todos nosotros? No me gusta hablar de un bando y del otro bando, prefiero hablar de historia aleccionadora que dieron especialmente todos aquellos que estuvieron en las trincheras, es decir, aquellos que con convicción fueron capaces de arriesgar hasta lo más importante, su propia vida.

Por tanto, y teniendo en cuenta que las limitaciones económicas no son una invención del legislador, teníamos que trasladar reconocimientos que están previstos en la propia ley, hacer frente, al menos en sus cotas mínimas, a los efectos de la discriminación que profesionales y no profesionales, combatientes al servicio de la República, sufrieron algunos de ellos, sus viudas o sus huérfanos como consecuencia, no de su voluntad, sino del resultado de la guerra civil. Experimentaron discriminaciones hasta 1975, muchos de ellos han mantenido vivos sus antecedentes penales, las accesorias de aquellas penas les privaron de sus posibilidades de encontrar trabajo. Todo eso no puede ser reparado en un texto legal, yo creo que está siendo reparado lentamente, y por eso yo pido comprensión, sobre todo a los portavoces del Grupo Popular, mediante el esfuerzo, mediante el símbolo que representa nuestra voluntad legislativa durante esta mañana.

Yo creo que aquí se está intentando profundamente reparar una injusticia histórica de la que ninguno de nosotros somos responsables, pero atención, no lo somos después de 1977; después de la Constitución de 1978 nadie es responsable de aquella injusticia histórica, porque la amnistía de 1977, que fue anterior a la Constitución, pero que abre el proceso constituyente, es la que permite precisamente que ahora hablemos, en los términos de la Constitución, de reconciliación, de un único pueblo, de un único ejército, de una única voluntad por aprender nuestra historia y reconstruir nuestra historia.

No se diga, Senador Bosque, que porque esto es una proposición de ley no tiene voluntad de Estado; no se diga, Senador Bosque, que ésta es una proposición de ley partidista. Senador Bosque, las Cortes tienen la misma capacidad de representar la voluntad nacional mediante sus iniciativas que lo pueda tener el Gobierno de la nación, exactamente igual. De hecho, su Grupo Parlamentario del Congreso también enriqueció este texto legal; lo sostuvo. De una parte de su intervención yo entiendo que ustedes también están de acuerdo con él. Pero es que yo quiero decirles una cosa: no se puede decir que ésta es una ley partidista porque recoge, reconoce, satisface algunos de los derechos que debieron, tal vez, ser reconocidos con anterioridad a 1977; habían transcurrido ya muchos años desde la fecha en que se causó aquella discrimi-

minación hasta 1977. ¿Puede preguntarse que una proposición de ley no tiene voluntad de Estado porque reconoce mínimamente los derechos a un colectivo de hombres que sirvieron no a un Ejército de partido, porque no lo eran en tanto que militares de partido, sino a unos hombres que estaban defendiendo al Estado español reconocido internacionalmente hasta el 1.º de abril de 1939? Pero, ¿cómo se puede decir que esto es una proposición partidista cuando es eminentemente una proposición con amplio sentido de Estado?

Yo les pido esa comprensión porque, además, ustedes plantean que resolvamos el problema de la guerra civil con esta proposición de ley. El problema de la guerra civil está resuelto, Senador Bosque, con la Constitución —y usted lo ha dicho—, no con un desarrollo legislativo de la propia Constitución; está resuelto en nuestra vida cotidiana y en las relaciones que tenemos políticamente entre unos Grupos Parlamentarios y otros.

Por favor, no reabra artificialmente —porque los reabría artificialmente—, con la terminología de bandos y de grupos, un problema que está resuelto en 1977. Por lo tanto, comprenda que, aunque tarde —y no por nuestra culpa—, estamos resolviendo ese problema que pudo haberse resuelto antes de 1977 si hubiera habido generosidad por parte de quienes instauraron, por vencedores, una nueva legalidad. No es responsabilidad de ninguno de nosotros, después de 1977. Pero hoy, 1984, comprendamos que esta proposición, cuarenta y nueve años después, no puede —como el Senador Prat ha señalado— resolver ese problema como nos hubiera gustado resolverlo en su totalidad, en su amplitud, pero que, al elevar al plano de igualdad a aquellos que estuvieron discriminados desde 1936-1939 hasta 1977 establece —yo diría— que el último peldaño perfectible —como ha dicho el Senador Prat—, y no solamente perfectible por el procedimiento de la admisión de enmiendas, sino perfectible por cuanto que la propia aplicación de la Ley nos revele sus insuficiencias, sus limitaciones y sus alcances.

Yo creo, para terminar, señoras y señores Senadores, que este texto legal no puede verse —como el Senador Bosque nos ha señalado— con amargura por parte de nadie; yo creo que, en última instancia, si podemos tener amargura —que la podemos compartir unos y otros—, es porque los españoles hemos sido incapaces hasta nuestros días, hasta 1977, de solucionar ese problema profundo que hoy no podemos resolver plenamente, pero que, sin embargo, desde nuestro punto de vista, algunas intervenciones, no la mía, sino las de todos ustedes —resalto la de don José Prat—, lo han resuelto en el plano en el que yo creo que es más importante, en el plano de las ideas, en el plano de la solidaridad y en el plano del espíritu.

Muchas gracias. *(Aplausos en la izquierda.)*

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Terminado el debate a la totalidad con el turno de portavoces, vamos a entrar en el articulado de la ley.

El preámbulo tiene un voto particular, número 3, del **Preámbulo**

Grupo Parlamentario Popular, que se corresponde con la enmienda número 35.

El Senador Bosque Hita tiene la palabra.

El señor BOSQUE HITTA: Señor Presidente, señorías, no hice uso del turno de réplica que podía haberme correspondido porque quería acortar el tiempo del debate y porque tenía esta oportunidad inmediata para poder contestar.

Creo sinceramente, señor Laborda, que no se me ha contestado. Por si fueran pocos los testimonios que aduje antes, y no precisamente de mi Grupo Parlamentario, en relación con la necesidad de atender a todos, aún no están demasiado lejanas las palabras del Ministro de Defensa, cuando a finales del mes de junio hacía unas manifestaciones en la prensa en las que decía que, de tratar el tema de quiénes no eran profesionales el 18 de julio, habría que tratar también el tema de los alféreces provisionales. Lo dijo con estas palabras. No entiendo entonces que, si hasta un miembro del Gobierno opina de esta forma, por lo menos opinaba de esta forma, no haya sido posible reconocer, recoger estas manifestaciones y haber dado la solución, repito, definitiva.

Entre las enmiendas presento una a la totalidad con texto alternativo, porque mi Grupo ha trabajado en profundidad en este tema, texto alternativo generoso y amplio para todos. No pudo ser admitido a trámite en razón de que no podía tener más que una sola forma, la de veto a la proposición de ley, y no era nuestro propósito vetar, sino todo lo contrario, ayudar a que la proposición de ley fuera adelante en las mejores condiciones.

Yo, señor Presidente, voy a pedir permiso para poder defender conjuntamente la enmienda número 34 que es al título, la enmienda número 35 que es al preámbulo, la enmienda número 36 que es al título del Título I...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): De todas formas, Senador Bosque, si me permite una recomendación, yo le agradecería que, por guardar el procedimiento, utilicen el turno de réplica, y cuando salgan a defender las enmiendas se atengan ustedes a las mismas, porque muchas veces se llama la atención a los Senadores porque se salen fuera de la defensa. Por lo tanto, prefiero que utilicen el turno de réplica para hacer una réplica.

El señor BOSQUE HITTA: Lo tendré en cuenta.

Las enmiendas que voy a defender están perfectamente conectadas con la filosofía que estoy intentando mantener delante de SS. SS.

La número 34 es al título de la ley. Nos parece que el único procedimiento para insistir en que esta ley sea una ley de Estado, sea una ley superadora, es que en lugar de ser el título que se propone fuera el siguiente: «Sobre reconocimiento de derechos y situaciones militares derivados de la Guerra Civil de 1936 a 1939». Nos parece que esto es omnicompreensivo, que no queda absolutamente nadie fuera y que, de esa manera, sí que tratamos al completo colectivo que participó en aquel desgraciado instante de nuestra historia nacional.

El preámbulo, como consecuencia de este nuevo título que nosotros proponemos, sería el siguiente: «La Ley 46/1977, de 15 de octubre, el Real Decreto 6/1978, de 6 de marzo, y la Ley 10/1980, de 14 de marzo, regularon en su día en forma imperfecta los derechos de los militares profesionales que participaron en la Guerra Civil y fueron afectados por el final de la misma, por lo que se hace necesario completar estas normas según los términos previstos en esta ley, de acuerdo con el principio de igualdad consagrado por nuestra Constitución. Asimismo, se ha considerado oportuno extender el reconocimiento de ciertos beneficios a quienes, incorporados a los Ejércitos participantes en aquella contienda, antes del 1 de abril de 1939, prestaron servicio y alcanzaron responsabilidades de mando. Por todo ello se dicta la presente ley».

Vuelvo a responder con la misma filosofía. Creo que se está olvidando a quienes participaron en el otro bando, y si es necesario recomponer y es necesario reconstituir situaciones que fueron dañadas de manera muy especial por un final distinto de aquella contienda, lo que no podemos hacer en este momento es producir el olvido de pocos o muchos, en pequeña escala o de gran importancia, que pueden resultar en estos momentos diferenciados cuando se van a reconocer, parece ser que de manera definitiva, aunque no lo es, aquellos resultados de aquella guerra.

Por supuesto, el título del Título I necesita una reordenación también, y todo ello en razón de que se utiliza una terminología que impediría de cualquier manera que pudieran acogerse todos los españoles que participaron en la guerra, y puesto que se trata del Título I, y puesto que la estructura de la ley nos viene dada de esta manera, y puesto que en estos momentos no ha podido ser tramitada una enmienda a la totalidad con texto alternativo, el título quedaría redactado de la siguiente manera: «De los militares profesionales». De esta manera nuestro Grupo Parlamentario quiere de nuevo plantear que el tema de la reconciliación debe de ser algo que no puede estar ausente de los momentos que estamos viviendo en esta Cámara; que es necesario que consideremos que la igualdad debe de ser manifestada en estos instantes, y consideramos que el objetivo de la ley debe de ampliarse para todos; que no debe ser exclusivamente reducida a quienes combatieron a las órdenes del Gobierno de la República, porque desde ese punto de vista estaríamos colocando en una situación de agravio comparativo a quienes combatieron en el Ejército contrario, y nos parece que eso, en estos momentos, no es bueno para nadie.

Por eso es por lo que pedimos la reconsideración del texto presente y que se tengan en cuenta las enmiendas que mi Grupo ha presentado. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Para turno en contra el señor Martínón tiene la palabra. (Pausa.) No va a utilizar el turno en contra. ¿Los señores portavoces desean intervenir? (Pausa.) El señor Ferrer tiene la palabra.

El señor **FERRER I PROFITOS**: Gracias, señor Presidente, muy brevemente.

De la misma forma que lo hice en Comisión, también quiero expresarlo ahora, es natural que, desde un punto de vista teórico, haya una desigualdad. Ahora, lo que es evidente es que no se trató igual, por circunstancias obvias, a los componentes de un bando o de otro. Entonces, yo entiendo que tratar igual a los desiguales no es justo. Se tiene que tratar desigual a los desiguales. Basta ver toda una prolija lista de decretos y de normas a las que pudieron acogerse los militares según el lado en el que estuvieron, y en cambio las represalias, y muchas veces toda clase de privaciones, que sufrieron los otros.

Precisamente por respeto a lo que ha dicho el Senador del Grupo Popular, y por respeto para unos y para otros, nuestro Grupo —yo lo hago en su nombre— hace esta diferenciación en las motivaciones, puesto que no es el mismo el tratamiento que recibieron «a posteriori» unos y otros. Aunque pueda haber casos aislados, es muy diferente la situación en que quedaron unas personas de estos colectivos y otras.

Muchas gracias.

El señor **FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA**: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar decir que las palabras que recogía el portavoz del Grupo Popular del Diputado comunista Fernández Inguanzo, yo las suscribo, y es precisamente esa base del deseo de igualdad en el trato el que nos lleva en este momento a no tener más remedio que rechazar las argumentaciones del portavoz del Grupo Popular, señor Bosque, porque, como se ha expresado aquí, no hay cosa más injusta que tratar igual a los desiguales; criterio este que incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recoge claramente.

Me parece que no es cuestionable el hecho de que entre los militares profesionales que sirvieron a la República y los que sirvieron en el bando franquista había, efectivamente, una diferencia con posterioridad a la terminación de la contienda. Son numerosísimos los Decretos, las Leyes que ofrecieron a los del bando vencedor una cantidad enorme de posibilidades, que fueron reduciendo los requisitos que se les exigían, desde empezar exigiéndoles seis meses de presencia en el frente hasta terminar por quitar incluso ese requisito, y se les ofrecieron puestos desde maestros hasta funcionarios civiles de prisiones, para ingresar en los Ejércitos, en la policía en sus diversos cuerpos, etcétera, de tal manera que, finalmente, detrás de esa batería de normas jurídicas que posibilitaban de la manera más amplia los beneficios para los que sirvieron en el bando vencedor, incluso, obviamente, para los que habían entrado con carácter provisional en la contienda, nos parece que la situación que quedó con posterioridad a toda esa batería de normas jurídicas era una situación de clara desigualdad, que si ahora sufriera un tratamiento igual sería un tratamiento injusto, en nuestra opinión.

Lo que estamos tratando de reparar es esa desigualdad, y me parece que no es de recibo acogerse al artículo

14 de la Constitución, porque, insisto, la igualdad en el trato para los desiguales no es un trato igual, es un trato desigual. Nosotros entendemos que no hay justificación para esas alegaciones que el portavoz del Grupo Popular hacía. En este punto yo tengo que suscribir, y además con alegría, las manifestaciones del portavoz socialista, desgraciadamente otras no, pero estas sí.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Lizón Giner): Tiene la palabra el señor Fernández.

El señor **FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID**: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir en el turno de portavoces, y también para abreviar, y por razones de economía, que tan gratas nos resultan a todos, voy, como digo, a referirme a las tres enmiendas que mi compañero el Senador Bosque ha defendido, es decir, las números 34, 35 y 36, porque todas afectan al contenido, al umbral de la misma y, en el fondo, a su punto de arranque.

El objeto de esta proposición, enmienda número 34, creemos que debe ser, y luego hablaremos de otras cosas, tanto resolver la discriminación en el trato que reciben por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, los militares profesionales con respecto a los civiles, como la superación definitiva de lo que para todos los españoles supuso la guerra civil de 1936 a 1939. Y acabamos de decir adrede los militares profesionales con respecto a los funcionarios civiles, y no hemos mencionado para nada a la República. Este punto, la República, lo que la República tiene que ver con todo esto, es objeto de otras enmiendas que iremos viendo a lo largo de la mañana, porque para nosotros no tiene ninguna duda esta posición.

En la guerra, en los dos bandos, hubo militares profesionales que cumplieron las órdenes de sus respectivos Gobiernos, de sus respectivos mandos; el republicano, el Gobierno de la República española legalmente constituido en abril de 1931, en el caso, como digo, de la Ley 46/1977, del 15 de octubre, o en el llamado nacional, los militares profesionales que combatieron en el otro Ejército, tan españoles como el otro. Pero debe entenderse que todos ellos, como militares que eran, y diría más, como militares que son, estaban al servicio de España y no de tales Gobiernos. Esto es así, y así lo entendemos nosotros, porque las Fuerzas Armadas están al servicio de la Nación, están al servicio de España, con independencia de los Gobiernos formados o que puedan formarse. En el fondo esto no es más que una equiparación constitucional.

Señores, con esta ley que hoy traemos aquí, a propuesta del Grupo socialista, vuelve, una vez más, a ponerse de manifiesto que al Grupo Socialista, al Gobierno Socialista y al PSOE le sobran votos, pero le falta generosidad, y mucho me temo, querido, admirado y respetado Senador Prat, que en este caso no podemos recordar a don Fernando de los Ríos, porque también le falta poesía.

También entendemos, con respeto a opiniones de altos profesionales y de ilustres parlamentarios ya fenecidos, también se ha dicho antes la cita, que no queremos que las leyes sean buenas, sino perfectibles. Nosotros opina-

mos —y así opinan muchos de la doctrina política y todos sus tratadistas— que las leyes son buenas no tanto por su mejor técnica, no tanto por su mejor elaboración, no tanto por una serie de razones de tipo sustantivo —evidentemente, dignas de ser tenidas en cuenta—, sino porque sean iguales para todos, de exacto cumplimiento para todos, sean unos o sean otros.

En lo que se refiere al título, vamos a hablar del preámbulo. Como ya ha dicho mi compañero de Grupo y de Partido, el que proponemos como alternativo al de la proposición de ley lo hacemos porque se trata de un texto conciso de leer, ya que este otro texto es un texto tan barroco como el mismo título. La Ley dice: «Con el fin de que desaparezca la discriminación en el trato que reciben por la Ley..., los militares profesionales...», ya sabemos, esta redundancia finalista. Las leyes son siempre finalistas, siempre son con un fin. No queremos que las leyes tengan un fin, sino que siempre tengan una finalidad teleológica, un sentido finalista, donde se explica el porqué de una ley, se explica cómo está, en base a la corrección de ciertas imperfecciones observadas en la Ley 44/1977, de 6 de marzo, y en el Real Decreto-ley 6/1978, de 6 de marzo, y la tan citada Ley 10/1980, de 14 de marzo, así como en el reconocimiento de otros derechos para quienes prestaron aquel servicio y alcanzaron responsabilidades de mando.

En el preámbulo de esta proposición se deslizan, además, juicios de valor que realmente no deberían o, mejor dicho, no debieran tener cabida en este propósito superador de querellas. Dice así: «Superadas, felizmente, con la aprobación de la Constitución de 1978, las motivaciones emocionales que impidieran un año antes, en octubre de 1977, la plena solución del problema...», etcétera, y sigue el cantar. En primer lugar, señores, hay que decir que España disponía entonces ya de un Gobierno democrático, surgido de unas elecciones libres, a las que habían concurrido muchos Partidos, entre ellos el Partido Comunista, lo cual nos pareció muy bien. Hay que decirlo a título de que, quieran unos o no quieran, a la larga y a la postre, en aquella guerra, de memoria constante, pero que ojalá superemos para siempre, el Partido Comunista acabó capitalizando su ideología, su bandera y su protagonismo. En segundo lugar, si no se llegó a la plena solución del problema —frase textual— no fue por motivos emocionales, como se dice, ni por no haberse aprobado todavía la Constitución de 1978, sino porque, como decimos en nuestro texto alternativo, simplemente se regularon de forma imperfecta los derechos de aquellos militares profesionales.

Es más, la Ley 10/1980, de 14 de marzo, que es dos años posterior a la propia Constitución, sigue sin resolver del todo esta imperfecta regulación.

En este mismo preámbulo de la proposición aparecen otras expresiones incorrectas, como referirse al Ejército de la República; incorrectas desde nuestro punto de vista superador, que contempla sólo unas Fuerzas Armadas cuyos miembros, por su propia voluntad o por circunstancias personales que no entramos a analizar, porque aquéllos no estuvieron siempre en el mismo bando y hu-

bo, como todos sabemos, un constante trasvase, en que muchos fueron de un bando a otro y otros, menos, del otro al uno. Pero esto no hace al caso. Nos referimos a quienes sirvieron en ellas después del 18 de julio de 1936, según las órdenes impartidas por el llamado Gobierno republicano —y no lo digo peyorativamente— o por el denominado —y no lo digo peyorativamente— Gobierno nacional.

En fin, señorías, esta Ley, que debió ser una ley para todos, superadora, se ha quedado en una ley para pocos, dignísimos pocos, a los que, además, señorías, se les da muy poco. Insistimos en lo que decíamos al principio: esta ley no contribuye, sintiéndolo mucho, a superar nada. Esta ley es una ley que se ha quedado chica, se ha quedado estrecha y se ha quedado, desde que nació, mezcua.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Don José Prat tiene la palabra.

El señor PRAT GARCIA: Señor Presidente, señores Senadores. Una ley que se ha quedado chica, ¡con los años que cuesta conseguirla!

El título de la ley en el dictamen es muy claro y concreto: proposición de ley de reconocimiento de los derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, con una extraordinaria exactitud, con claridad. Hasta ahora no se había hablado de los carabineros, por ejemplo. Aquí se define el concepto y ámbito de la ley.

Por lo demás, en el título I se sigue la técnica que se ha seguido en las leyes de amnistía, que se han dado para los que habían sido condenados, no para todos. Había una inevitable desigualdad que corregir. Ahora, lo que quedaba por corregir, hasta donde es humanamente posible —que no es mucho— se refiere a todos los que han combatido en el Ejército de la República. Esto es lo que hace la ley, en la medida de lo posible, y no quiere buscar nuevas diferencias y nuevos privilegios.

Cuando yo decía que es una ley perfectible, lo que quería decir es que si resultaran privilegios a favor de los que han sufrido en su daño el privilegio ajeno, ello será corregido por el Gobierno socialista y por las Cortes socialistas. Y no quiero decir más. (*Aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Grupo Popular. La primera de ellas es la número 34, al título de la ley. (*El señor Fernández Fernández-Madrid pide la palabra.*) El señor Fernández Fernández-Madrid tiene la palabra.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Solicito que se voten agrupadamente las enmiendas números 34, 35 y 36, que son las que realmente hemos defendido.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Junto con

la del preámbulo, vamos a votar dichas enmiendas del Grupo Popular agrupadamente.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 142; a favor, 22; en contra, 120.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Quedan rechazadas.

Vamos a votar el preámbulo y el título I que eran objeto de las enmiendas, de acuerdo con el texto emitido por la Comisión, hoy dictamen de la misma. *(El señor Fernández-Piñar y Afán de Ribera pide la palabra.)*

Me imagino que es para una cuestión de orden. Tiene la palabra S. S.

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: Sí, señor Presidente, creo que quedaba una enmienda al título I, si no recuerdo mal.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Tiene S. S. razón. Vamos a votar el texto del dictamen del título de la ley y el preámbulo.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 143; a favor, 126; en contra, 16; abstenciones, una.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Quedan aprobados.

Defendida la enmienda del Grupo Popular al título I, queda la enmienda del Grupo Mixto, que se corresponde con una enmienda «in voce» de remisión al texto del Congreso.

Tiene la palabra el señor Fernández-Piñar.

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: Con su permiso, señor Presidente, hablaré desde el escaño, para abreviar.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Está en su derecho de hacerlo S. S., porque es optativo; solamente en preguntas es obligatorio.

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: Señorías, esta enmienda iba en el sentido de que se mantuviera la denominación inicial y no se admitiera el cambio que se ha introducido y la desaparición, por tanto, de las expresiones de «no discriminación». Esas expresiones de no discriminación han desaparecido progresivamente desde la proposición de ley hasta el texto que hoy tenemos entre las manos. El sentido de mi enmienda era manifestarme en contra de la desaparición de las expresiones sobre la no discriminación. Es coherente, por otra parte, que el Grupo Socialista, manteniendo la discriminación en el articulado, haya querido cambiar el título para que esté acorde con el articulado. No sería coherente que en el título apareciera la no discriminación cuan-

do en el articulado se mantiene esa discriminación. Y, fundamentalmente, la discriminación grave que se mantiene, en mi opinión, es la que ya ha sido aludida varias veces hoy: la referente a los militantes profesionales según que hubieran adquirido esa condición antes o después de la fecha del 18 de julio de 1936. El Tribunal Constitucional, en esa sentencia tantas veces mencionada esta mañana, deje claro, en mi opinión, en otro párrafo —no en los leídos por el portavoz señor Laborda, sino en otros—, que, al margen de la diferencia entre funcionarios civiles y militares en lo relativo a la reincorporación al servicio, en todos los demás aspectos el tratamiento debe ser igual para los funcionarios civiles y para los militares, con independencia de la fecha en que adquirieron tal condición. Si para los funcionarios civiles no existe distinción por el hecho de que ingresaran como tales antes o después del 18 de julio de 1936, ¿por qué se mantiene esa distinción para los funcionarios militares? El Tribunal Constitucional dice que no tiene justificación, rechaza el recurso en el que se le pide que resuelva ese problema y lo remite al poder legislativo, pero señala que esa obligación, esa sujeción al principio de igualdad en este punto, también alcanza al poder legislativo. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional.

Es cierto que la Dirección de lo Contencioso también se manifiesta en ese sentido, pero no es oportuno basar toda la argumentación en esa cita, que no es ya en este caso de autoridad para el Legislativo. No cabe duda, sin embargo, de que recoger la argumentación que la Dirección General de lo Contencioso establece sobre este punto nos parece a algunos portavoces adecuado, porque compartimos esa argumentación. Esa argumentación, la del Tribunal Constitucional y la nuestra, en este momento consisten en que no hay razones para discriminar a los funcionarios militares en relación con los civiles por el hecho de la fecha. Para los civiles no se tiene en cuenta la fecha; para los militares, por el contrario, se tiene en cuenta la fecha y se establecen tratamientos distintos para unos y otros.

Son numerosas, numerosísimas, las normas de la República que concedían carácter efectivo a la profesionalidad de los militares que ingresaron después del 18 de julio de 1936 y antes del año 1939. E incluso, como se ha leído ya esta mañana desde la tribuna, en esa normativa se establece que la condición de profesional no se establece para la contienda sólo, sino ya con la perspectiva de que una vez terminada la contienda, para el Ejército de la República —pensando entonces en esas normas que se iba a ganar esa contienda— ese carácter de profesional se concede no con carácter temporal para el período de guerra, sino para siempre.

Nos parece que no hacer caso a esa normativa de la República, no hacer caso a esas consideraciones del Tribunal Constitucional y a esta argumentación de que no hay razón que justifique el que por la fecha se distinga si se es profesional o no, es coherente con lo ya expresado por el Ministro señor Serra y por el portavoz socialista en el Congreso, que hablaban —y repito lo que antes dije— de que esa discriminación por la fecha es una

injusticia que hay que corregir. Y tenemos aquí los textos —que para no cansar a SS. SS. no vamos a leer— donde las expresiones del señor Sáenz Cosculluela y el señor Serra en el Congreso eran terminantes en contra de esta discriminación por la fecha. Sin embargo, ustedes la han recuperado, cuando no tenían por qué, en la proposición inicial. Repito lo que antes dije: no se me alcanzan las razones para esta discriminación que hace que esta ley se quede a medio camino. Quizá en una ley que tengamos que hacer dentro de poco tengamos que empezar diciendo lo mismo que se dice en el preámbulo de ésta: «Superadas las razones emocionales o de otra índole que en 1977 y en 1984 impidieron zanjar la cuestión...». Quizá en esa ley futura se tenga que abordar la definitiva solución de este problema.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? El señor Martínón tiene la palabra.

El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, las modificaciones que hemos introducido en los enunciados de la ley y de los dos títulos de la ley, en nuestra opinión corresponden más fielmente al nuevo contenido que tanto la ley como los dos títulos tienen. Y no porque nosotros creamos que la nueva redacción de la ley no atienda y no busque la eliminación de la discriminación que se le daba a un determinado colectivo en la Ley de Amnistía. Hemos llevado un tratamiento sistemático; hemos preferido que los enunciados de los dos títulos definan con bastante claridad y precisión cuáles son los dos colectivos de personas a los que afectan ambos títulos.

Pero el portavoz comunista ha hecho principalmente referencia a aquellas personas que en su opinión debería estar incluidas en el título I y no en el título II, como nosotros hacemos.

¿Cuál ha sido el criterio del Grupo Socialista para definir ambos colectivos, aquellos a los que afecta el título I y aquellos otros a los que afecta el título II? Nos hemos inventado una fecha arbitraria. La fecha del 18 de julio es la fecha del inicio de una guerra civil, e inevitablemente el inicio de una guerra, fuera civil o no, supone un aumento en el número de responsabilidad de mando militar en un Ejército que participa en la misma.

¿Por qué hemos incluido en el título II a todas aquellas personas que adquirieron responsabilidades de mando en el Ejército al servicio de la República, sin discriminar ni distinguir si su empleo le fue conferido por el Gobierno con carácter profesional definitivo o con carácter de campaña? Porque nosotros entendemos —y aquí, evidentemente, aplicamos un criterio principalmente político, no un criterio jurídico— que todos aquellos que sirvieron a la República en la guerra civil, con independencia de con qué carácter se les hubiera conferido su empleo, deben recibir en esta ley el mismo trato, porque todos lucharon por lo mismo, y el hecho de que se les haya conferido el empleo con un carácter o con otro, al menos desde la perspectiva histórica que hoy estamos analizando, en

nuestra opinión no tiene tanta importancia como para que a unos se les dé un trato de mayor entidad que a otros. Creemos que es más justo —y este es un criterio político discutible, como cualquier otro criterio político, pero es nuestro criterio— que a todas aquellas personas que adquirieron el mando una vez iniciada la guerra civil se les dé el mismo trato y no discriminar en función de con qué carácter el Gobierno les confirió el empleo. Por eso hemos distinguido aquellas personas que eran ya profesionales antes del inicio de la guerra y aquellas otras que adquirieron el mando después del inicio de la misma.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): La enmienda del Grupo Parlamentario Popular ha sido votada. Vamos a proceder a votar el voto particular del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 130; a favor, tres; en contra, 125; abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Queda rechazada.

Vamos a votar el texto del dictamen correspondiente al enunciado del título I. Título I

Iniciamos la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 145; a favor, 125; en contra, 19.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Queda aprobado el título I.

El artículo 1.º tiene varias enmiendas, la primera de ellas, la número 7, es del Grupo Cataluña al Senado. Artículo 1.º

Tiene la palabra el señor Ferrer.

El señor FERRER I PROFITOS: Con su permiso agruparía la enmienda 7 y la 8, que se refieren al artículo 1.º ¿Es así, señor Presidente?

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Sí, señor Ferrer.

El señor FERRER I PROFITOS: La enmienda número 7 pretende incorporar, cuando dice: «A los Oficiales, Suboficiales y clases...», el término de «Jefes», con el fin de que se entienda más claro que se refiere a todo el colectivo civil. Así de brevemente definiendo la enmienda número 7.

La enmienda número 8 a este artículo 1.º se refiere a lo que todos estarán de acuerdo en reconocer que es el punto neurálgico de esta proposición de ley.

Proponemos un apartado nuevo b), que dice lo siguiente en su justificación: «Se añade el párrafo b) a la actual redacción de la proposición de ley para hacer extensivo el ámbito de aplicación del título I de la misma al personal que ingresó con carácter efectivo y definitivo en las

Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público o en el Instituto de Carabineros de la República, con posterioridad al 18 de julio de 1936».

Vuelvo a repetir lo que dije en el turno de portavoces. La fecha del 18 de julio de 1936 no debe ser una fecha que divida la profesionalidad de unos y otros.

El señor Laborda, por el simple hecho de no estar de acuerdo con esta enmienda, me ha dicho que no he estado afortunado. Sin embargo, a mi compañero del Grupo de Senadores Vascos, como le ha dado la razón, ha venido a decirle que sí.

Nos hemos de referir al Tribunal Constitucional, a la Dirección General de lo Contencioso-Administrativo y al artículo 5.º del Decreto de la República, publicado en el número 136 de «La Gaceta de la República». Todos hemos de coincidir en que no es que lo contencioso del Estado nos mande lo que tengamos que hacer, señor Laborda, pero sí nos dice lo que tenemos que hacer, aunque nosotros tengamos facultad legislativa.

Nosotros tenemos que intentar asesorarnos para poder marcar esta profesionalidad. Esta profesionalidad es evidente, por ejemplo en el Arma de Aviación, tanto por las disposiciones que hay como porque ¿quién no concibe una profesionalidad en el Arma de Aviación? No es coger un mosquetón e ir de campaña, ni puedes intervenir en una guerra pilotando un avión.

O sea, señor Laborda, que ustedes presentan en principio una proposición de ley que está de acuerdo con esta modificación que nosotros hacemos en el artículo 1.º, y el Ministro de Defensa, que es de su partido, y el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso también están de acuerdo y dicen que van a apoyar esta proposición de ley que ha presentado el Partido que sustenta al Gobierno. Pero todas estas razones para usted no son suficientes y dice no pueden aceptar el que nosotros queramos incluir —mi Grupo— a todos los que se considera que tuvieron el empleo efectivo y no temporal o en campaña y que se les pase al Título I para que se les reconozcan unos derechos que con justicia se ganaron en aquella contienda civil.

El mismo Senador Prat ha hablado de principios morales; yo añado de dignidad. Usted dice que no es una ley de pensiones. Es que esta es una ley para viejos, y tiene cierta razón don José cuando lo dice que no solamente es importante el recibir una gratificación o una pensión, sino que es muy importante también restablecer la dignidad, como es poder usar el uniforme, poder tener cartilla militar o poder ir a un economato. Yo creo que no es lo mismo esto, Senador Laborda, que el que a un señor con una profesionalidad reconocida se le dé una pensión del régimen general de la Seguridad Social y una asistencia sanitaria.

Por todo ello, señorías, porque entendemos que la fecha del 18 de julio no es una línea que pueda dividir la profesionalidad de unos y de otros, y porque la legalidad republicana era exactamente igual antes del 18 de julio que después, pedimos la reconsideración y que se acepte este apartado b), para que con la restitución se pueda llegar a esta convivencia y se puedan restañar y olvidar

todas las heridas de aquella contienda civil; para que a todos estos colectivos que ahora quedan marginados se les puedan reconocer unos derechos que nosotros entendemos que se ganaron y que no se les pueden quitar por haber ingresado después del 18 de julio de 1936.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Hay también una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Fernández-Piñar tiene la palabra.

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: Señor Presidente, señorías, ustedes nos van a perdonar que hoy insistamos mucho en los primeros argumentos, pero es que realmente el fondo más importante de la cuestión que debatimos es la fecha del 18 de julio: si antes o después.

La enmienda que plantea el Grupo Mixto también va en esa dirección. Tiene una primera parte en la que trata de incluir a los Generales y Jefes dentro del ámbito de aplicación de la ley, pero parece ser que el criterio interpretativo del grupo mayoritario es que cuando dice «Oficiales» se encuentran incluidos Generales y Jefes, aunque coloquialmente o en muchas ocasiones se distinguen estas denominaciones, pero parece ser que éste no es el tema más importante, porque, como digo, podía aceptarse que entre los Oficiales vienen incluidos Generales y Jefes como añade nuestra enmienda.

El tema más importante, insisto, es la inclusión en el ámbito del Título I de los militares profesionales con posterioridad al 18 de julio de 1936. Y como hemos aludido en varias ocasiones a las manifestaciones del señor Ministro de Defensa y del portavoz del Grupo Socialista, señor Sáenz Cosculluela, en el Congreso, yo se las voy a leer literalmente para que vean la contundencia de sus expresiones. Dice el señor Ministro de Defensa en junio del año pasado que hay coincidencia de que puede haber discriminación entre los funcionarios militares y civiles de dos tipos, porque la legislación vigente distingue entre militares en base a una fecha. Eso no sólo es arbitrario, sino que puede ser claramente anticonstitucional. Tan profesionales pueden ser los que fueron antes del 18 de julio, como los que lo fueron después, por lo cual estamos enfrentados a una real discriminación, en tanto que para los funcionarios civiles esa fecha no es un motivo de delimitación del colectivo, sino la condición específica de funcionario civil. Por ello, en el caso militar, hemos de ir exactamente a la condición de profesional militar, yendo a la definición de militar profesional y no a la delimitación por la fecha del 18 de julio. Estas son las manifestaciones del señor Ministro en junio de 1983.

Asimismo, el señor Sáenz Cosculluela, también terminante y contundente en su expresión, afirma que la Ley de Amnistía estableció un tipo de discriminación para los militares profesionales, incluso con arreglo al criterio de profesionalidad que estableció el Real Decreto-ley 6 de 1978, es decir, la fecha del 18 de julio como elemento para definir la profesionalidad. En estos supuestos se establece una discriminación porque no se trata igual a esos militares profesionales que a los funcionarios civi-

les, al permitir a éstos la reincorporación en sus empleos en calidad de activos o retirados, mientras que a los militares profesionales no se les permite la reincorporación. Este es el primer tipo de discriminación que contradice el espíritu de la Constitución y que contiene la propia Ley de Amnistía.

El segundo tipo de discriminación que se plantea en torno a la situación de los militares profesionales de la República es la propia definición de la profesionalidad, porque el Real Decreto 6 de 1978 dice que son profesionales precisamente aquellos que tenían esa condición hasta el 18 de julio de 1936, criterio que, aparentemente al menos, es inconstitucional, porque una fecha no debe ser la que determine la condición de profesionalidad, sino la circunstancia de haber consolidado su condición de profesional con carácter efectivo. No cabe duda de que estas dos discriminaciones constituyen una grave injusticia que es preciso reparar. ¿Por qué no la reparan? ¿Qué ha cambiado en este país desde junio del año pasado hasta ahora para que ustedes cambien estos criterios?

Además, he de señalar que la injusticia que se comete con algunos colectivos es manifiesta. Se ha mencionado aquí el tema de los aviadores de la República, y hay que afirmar que es de una injusticia realmente lacerante. Si estamos tratando de superar discriminaciones, cuando uno mira hacia atrás y ve todo el tipo de ventajas, de beneficios y de posibilidades que se dio a los militares profesionales (en este caso claramente provisionales) del bando franquista, ¿por qué ahora se discrimina a los militares que por la normativa republicana fueron declarados profesionales en efectivo? ¿Por qué se les discrimina? ¿Qué ha cambiado en este país desde el 29 de junio de 1983 hasta el día en que estamos para que varíen tan radicalmente sus planteamientos y donde antes hablaban de injusticias, ahora digan que es lo normal, donde antes hablaban de discriminación intolerable, ahora la justifiquen?

Ese es el sentido de nuestras enmiendas, y yo creo que ustedes están obligados a reflexionar sobre este punto.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): ¿Turno de Portavoces? (Pausa.)

El señor Ferrer tiene la palabra.

El señor FERRER I PROFITOS: Señor Presidente, voy a insistir una vez más en los planteamientos que ya he manifestado y voy a apoyar las afirmaciones del señor Fernández-Piñar. El se ha reafirmado en sus planteamientos leyendo intervenciones textuales realizadas en el Congreso de los Diputados; yo las he leído en el turno de portavoces. Tengo que decir, sinceramente, que si el Partido Socialista estuviera en la oposición y esta proposición de ley la hubiese presentado otro partido, la sala atronarí en defensa de lo que ustedes sienten en su interior; atronarí defendiendo lo que defendemos en este mismo momento tanto el Senador Fernández-Piñar como yo representante de Cataluña al Senado. Porque, ¿qué ha cambiado del año pasado hasta ahora?

Yo recuerdo intervenciones que tenían lugar cuando a

veces se tocaban temas así en la otra legislatura sin tratarse de proyectos de ley, y esto me da autoridad para decir que si ustedes estuvieran en la oposición, desde la oposición lo defenderían con mucha más agresividad y mucho más ímpetu que nosotros.

He visitado y he estado reunido con colectivos a los que ahora el Título II margina en unos derechos que ellos creen dignamente ganados. A estos colectivos no se les puede hacer solamente un reconocimiento simbólico, y me refiero a palabras exactas que dijo el Senador Labora en Comisión, ésta no es una ley de pensiones de guerra; con esta ley se les hace un reconocimiento simbólico.

Creo, y con esto termino, que o se tenían que haber dejado las cosas casi como estaban, o, para hacer una ley que continúa marginando a gran cantidad de componentes, era mejor no hacer nada.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Tiene la palabra el señor Martínón Cejas.

El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, ante las manifestaciones de los Grupos que han intervenido hasta ahora, siempre ha quedado como pendiente y un poco flotando en el aire que los socialistas hemos sacado o estamos sacando adelante una ley con la que, en el fondo, no estamos de acuerdo; que a nosotros mismos nos parece una ley absolutamente insuficiente y que en nuestros corazones aspiraríamos a mucho más de lo que aquí estamos haciendo. Y yo quiero decir que no es así. Esta es una ley con la que nos quedamos razonablemente satisfechos. Ya dijimos en la Comisión que una ley de este tipo no puede llegar a resolver totalmente el problema que se originó a través y como consecuencia de una guerra civil; la reparación absoluta es imposible; estamos intentando una reparación parcial que a nosotros nos resulta razonablemente satisfactoria.

Creo que tampoco es razonable seguir hablando de que estamos actuando de forma distinta a como lo hubiéramos hecho cuando estábamos en la oposición. Opino que la lectura objetiva de la historia reciente de España pone de manifiesto la alta responsabilidad que tuvo el Grupo Parlamentario Socialista, tanto del Congreso como del Senado, cuando estaba en la oposición, en cualquier ley que se debatiera aquí y, especialmente, en aquellos tipos de leyes, como ésta, en que se hace referencia a la guerra civil y a una etapa de España donde no todos podíamos sentarnos en Cámaras como ésta.

El Senador Ferrer insiste en incluir el término «jefe» en el artículo 1.º. Yo le invitaba el otro día a que leyera las Reales Ordenanzas. No sé si habrá tenido oportunidad de hacerlo, pero, por si pudiera ser de satisfacción, digo aquí que la intención del Grupo mayoritario de la Cámara es que, al incluir el término «oficial», nos referimos a los oficiales particulares y a los oficiales generales; por tanto, queda incluido el término de «jefe», y no es necesario volver a incluirlo.

También deseo referirme, aunque no sea muy impres-

cindible, a que se empeñan en poner en contradicción una intervención del Ministro de Defensa en el Congreso y del portavoz socialista en aquella Cámara, con la posición que hoy hemos adoptado aquí. Efectivamente, los socialistas hemos cambiado de opinión a lo largo de la tramitación de la proposición de ley, y en ese cambio de opinión (que yo creo que no es un sistema malo, es decir, es prueba de que no somos dogmáticos, que estamos dispuestos a reflexionar sobre un tema de la importancia que tiene éste) hemos llegado a la conclusión —dicible políticamente, indudablemente, como cualquier decisión política— de que es preferible que se dé el mismo trato a todas aquellas personas que hayan alcanzado su condición de mandos después del inicio de la guerra civil. Se han dado aquí argumentos jurídicos, como la sentencia del Tribunal Constitucional, de la cual voy a leer un párrafo. Dice que los nombramientos militares obtenidos al amparo de las disposiciones dictada por la República durante la guerra civil no tienen efectos, ya que tales disposiciones no se han integrado en el ordenamiento jurídico. *(El señor Vicepresidente, Guerra Zunzunegui, ocupa la Presidencia.)*

Nosotros podemos hacer un tratamiento igual para todos aquellos que participaron con responsabilidad de mando después del inicio de la guerra civil, y ése, insisto, es un criterio político discutible. Nosotros creemos que aplicar el criterio de la profesionalidad, el criterio de haber recibido el empleo por parte del Gobierno de la República con carácter definitivo de aquellos otros que recibieron el empleo con carácter de campaña en una ley de este tipo es una discriminación y supone una injusticia. Tanto los que recibieron un empleo con el carácter de definitivo como los que lo recibieron con el carácter de campaña, ambos lucharon por sus ideales y a ambos les vamos a dar el mismo tratamiento.

Acepto, insisto, que el tema es discutible, pero acéptese también que el tema es perfectamente lícito y que no cabe, desde luego, enseñar opiniones de la Dirección General de lo Contencioso y otras opiniones por muy dignas y muy respetables que sean y por mucha autoridad que ello suponga.

La tesis del señor Fernández-Piñar es incluir en el Título I no sólo a aquellos que obtuvieron su empleo con carácter definitivo después del inicio de la guerra, sino también a aquel otro colectivo que obtuvo su empleo con carácter de campaña, es decir, darles a todos el mismo tratamiento. Ya le respondimos en Comisión que eso sería un tratamiento que, en nuestra opinión, también sería incorrecto. Aquellos que participaron en la guerra al servicio de la República no lo hicieron con la idea de convertirse en funcionarios el día de mañana; lo hicieron con la idea de defender unos ideales que ellos creían correctos, defender lo que ellos estimaban mejor para su patria. Esta ley lo que pretende es reparar, insisto que parcialmente, las consecuencias que estas personas han sufrido por haber participado en la defensa de la República.

En base a estas consideraciones vamos a votar en contra de las enmiendas defendidas por el Grupo Mixto y

por el Grupo de Cataluña al Senado. Gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Vamos a proceder a votar, en primer lugar, las enmienda del Grupo de Cataluña al Senado. Pregunto al señor portavoz de Cataluña al Senado, Senador Ferrer y Profitós, si tiene inconveniente en que se voten las dos enmiendas conjuntamente o prefiere que se voten por separado, es decir, la enmienda número 7 y la enmienda número 8, que corresponde al voto particular número 1.

El señor FERRER I PROFITOS: Prefiero que se voten por separado, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Procedemos, en primer lugar, a la votación de la enmienda número 7.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 128; a favor, seis; en contra, 122.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Queda rechazada.

Procedemos, seguidamente, a votar la enmienda número 8 del mismo Grupo.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 129; a favor, cuatro; en contra, 124; abstenciones, una.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Queda rechazada.

Votamos, seguidamente, la enmienda número 1, que se corresponde con el voto particular número 2 del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 128; a favor, uno; en contra, 124; abstenciones, tres.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Queda rechazada.

Procedemos, finalmente, a la votación del texto del artículo 1.º conforme al dictamen de la Comisión.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 127; a favor, 124; en contra, tres.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Queda aprobado el texto del artículo 1.º.

Seguidamente, procedemos al debate del artículo 2.º. Artículo 2.º

En primer lugar, voto particular del Grupo Parlamentario Mixto, que se corresponde con la enmienda número 2.

Tiene la palabra el señor Fernández-Piñar.

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA:
Gracias, señor Presidente.

La enmienda que proponemos tiene la intención de que el conjunto de los militares al que, en nuestra opinión, debería afectar la proposición de ley, pudieran reincorporarse no directamente como retirados, sino que pudieran reincorporarse al Ejército en la calidad que su edad estableciera.

Es obvio que la abocación de esta enmienda no se va a traducir en que a ninguno de los militares afectados se le convierta en militar en activo, toda vez que la edad ya fija una barrera insuperable. Los militares a los que nos referimos estarían por encima de los setenta años y todos, obviamente, irían a la situación de reserva. Pero en la línea de lo señalado anteriormente, de que esta ley contenía algunos elementos de carácter simbólico en el sentido de reparación, en el sentido del reconocimiento de una dignidad, etcétera, pensamos que ese carácter simbólico, con esta enmienda se recogería perfectamente sin que por lo demás, en la práctica, supusiera un cambio del resultado. Repetiré que en nuestra enmienda pretendemos la inclusión de todo el colectivo sin discriminaciones, y, como se ha argumentado leyendo un párrafo de la Sentencia del Tribunal Constitucional, yo quiero decir que en esa Sentencia, además de reconocer que las normas de la República no se integraron en el nuevo Ordenamiento Jurídico, también se establece que la amnistía concedida en 1977 reconocía la normativa de la República para el caso de los funcionarios civiles y daba validez a esa normativa. La cuestión ahora es si en este reconocimiento de la normativa de la República para los funcionarios civiles y no para los militares hay una discriminación y un trato desigual que afectaría al artículo 14 de la Constitución, y el Tribunal Constitucional, efectivamente, se manifiesta en que la amnistía a los militares debe estar en la línea de la concedida a los funcionarios civiles, sin otras especificaciones que las requeridas por la singularidad de las Fuerzas Armadas, singularidad a la que, antes, el mismo Tribunal ha reducido al tema de la reincorporación. Por tanto, no es correcto, en mi opinión, leer aspectos parciales de la Sentencia del Tribunal Constitucional, sino que hay que aludir a todos.

Yo creo que los argumentos ya expresados en anteriores intervenciones y en ésta me van a evitar el tener que insistir en los mismos, aparte de que creo que están suficientemente claros y SS. SS. los tienen ya en la cabeza cuando votan. En esa dirección voy a dar por defendidas todas las enmiendas que tengan relación con esta cuestión.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui):
Muchas gracias.

Entonces, señor Fernández-Piñar, ¿da por defendida la enmienda número 2?

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA:
Si le parece, señor Presidente, conforme vayan surgiendo, yo se lo iré diciendo.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui):
¿Para turno en contra? (Pausa.)

El señor Velilla tiene la palabra.

El señor VELILLA ROYO: Señor Presidente, señorías, señor Fernández-Piñar, como bien dice usted en su motivación, lo que nos propone es obvio —y leo sus explicaciones— que podría implicar grandes dificultades. Indudablemente las reconocemos y usted mismo las reconoce; la reincorporación de este colectivo a las Fuerzas Armadas no creo tampoco que sea deseada por ellos mismos. Pensamos que con el pase a su condición de retirados cumplimos sus aspiraciones y, al mismo tiempo, damos satisfacción plena al contexto del proyecto de ley que estamos debatiendo.

En consecuencia, votaremos en contra.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui):
¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Seguidamente pasamos al debate del voto particular número 1, que se corresponde con la enmienda número 9, del Grupo Cataluña al Senado.

Para turno a favor el señor Ferrer i Profitós tiene la palabra.

El señor FERRER I PROFITOS: Señor Presidente, la enmienda número 9 pedía la incorporación de un nuevo artículo 3.º, que era para determinar los porcentajes y los trienios, pero al no ser aceptada la enmienda número 8, es obvio que tengo que retirarla.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Al no haber más votos particulares al artículo 2.º vamos a proceder a la votación.

En primer lugar, votamos la enmienda del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 117; a favor, uno; en contra, 114; abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui):
Queda rechazada la enmienda.

Seguidamente procedemos a votar el texto del artículo 2.º conforme al dictamen de la Comisión.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 119; a favor, 115; en contra, uno; abstenciones, tres.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui):
Queda aprobado el artículo 2.º

Entramos en el debate del artículo 3.º A este artículo Artículo 3.º

tenemos, en primer lugar, la enmienda número 4, que se corresponde con el voto particular número 2, del Grupo Mixto. Pregunto al señor portavoz si la da por defendida.

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: Señor Presidente, efectivamente la doy por defendida.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Asimismo, existe el voto particular número 3, del Grupo Popular, que se corresponde con la enmienda número 37.

Para su defensa, el Senador Bosque Hita tiene la palabra.

El señor BOSQUE HITA: Señor Presidente, señorías, esta no es una enmienda al artículo 3.º Voy a explicar cuál es el mecanismo que hemos utilizado nosotros, porque cuando enmendamos el Título I, lo hicimos con un texto alternativo completo para todo el Título.

Posteriormente, como nuestros textos en lo que respecta a los artículos 1.º, 2.º y 3.º del texto del dictamen son exactamente iguales, con un lenguaje quizá distinto, pero con un contenido exacto, decidimos modificar en la propia Comisión nuestra posición, retirando toda la primera parte de la enmienda que era a la totalidad del título, y dejar exclusivamente lo que constaba como artículo 5.º, pero con una redacción rectificadora, puesto que hubo errores en la transcripción. Entonces, nuestra enmienda no es al artículo 3.º, con el que estamos plenamente conformes, y lo vamos a votar favorablemente, como el 1.º y el 2.º la enmienda se reduce a pedir un artículo 3.º bis por el que la filosofía que estamos manteniendo desde el principio quede perfectamente garantizada. Se trata de que la legislación vigente en estos momentos no vaya a situar diferenciadamente por razón de ideologías políticas a personas que, objetivamente, están en iguales condiciones de acuerdo, como hemos dicho antes, con la Constitución, aunque subjetivamente en otros momentos hayan podido estar en situación contraria. Al decir la Constitución, con toda justicia, que no puede haber diferencias entre los españoles, que todos son iguales ante la ley por razones ideológicas o de otro tipo, lógicamente aquellas situaciones subjetivas dejan de tener valor. Por tanto, nos parece que la ley no debe, de ninguna de las maneras, situar legalmente en diferente situación a quienes objetivamente están en la misma situación. Por eso proponemos un artículo 3.º bis, para resolver estas posibilidades de agravio comparativo, al objeto de que nadie quede afectado de forma que quedara en situación inferior a la que hubiera obtenido de haber estado en la otra situación ideológica. Proponemos que todos, cualesquiera que sean, obtengan los mismos empleos, obtengan las mismas pensiones, para que efectivamente el principio de igualdad ante la ley quede garantizado y cumplido.

Este es el contenido de la enmienda que hemos presentado.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra el señor Campoamor.

El señor CAMPOAMOR RODRIGUEZ: Hablo en nombre del Grupo Socialista, y parece que, en este momento procesal en que estamos, el voto tiene que ser lógicamente en contra, ya que hemos aceptado que el título de la ley termine especificando «de la de República». Realmente, la propuesta de enmienda del Senador Bosque Hita está orientada para que, además de a los que estuvieron al servicio de la República, pudiera amparar a los demás. Ya hemos hablado de eso, no solamente nosotros, sino otros portavoces, no de la igualdad, sino de la igualdad de oportunidades.

Señor Bosque Hita, a esos señores que usted quiere incluir aquí se les han dado unas oportunidades que los otros no tuvieron. Si no las alcanzaron o no llegaron a lo que tuvieron que llegar, es una cuestión propia, personal e individual, no es una cuestión de un grupo, es una cuestión individual, de cada uno de ellos, de acuerdo con la propia reglamentación que se tenía establecida; el Gobierno estableció unas bases para que llegaran a un sitio o a otro. Lo que parece absurdo es decir que esa propia normalización del Gobierno nos la vayamos a saltar ahora dándoles otra oportunidad.

Esta reflexión no debía hacerla, debía limitarme a decir que, aceptado el título general de la ley, que se refiere a los que han servido a la República, esta enmienda no la podemos aceptar.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Turno de portavoces. (Pausa.)

Vamos a proceder a la votación, en primer lugar de la enmienda número 4, voto particular número 2, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 127; a favor, uno; en contra, 124; abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Queda rechazada.

Seguidamente, procedemos a la votación del voto particular que se corresponde con la enmienda número 37, del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 127; a favor, 15; en contra, 112.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Queda rechazada.

Por último, procedemos a votar el texto del artículo 3.º, conforme al dictamen de la Comisión.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 127; a favor, 126; abstenciones, una.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Queda aprobado el artículo 3.º

Título II El artículo 4.º, como quiera que pasa a ser disposición adicional primera, con algunas modificaciones, lo debatiremos en el momento pertinente.

Pasamos al Título II, respecto del cual tenemos, en primer lugar, la enmienda número 13 que se corresponde con el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado.

Para consumir un turno a favor, tiene la palabra el señor Ferrer.

El señor FERRER I PROFITOS: Lo doy por defendido, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Gracias, señor Ferrer.

En segundo lugar, la enmienda número 41 que se corresponde con el voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Bosque.

El señor BOSQUE HITTA: Señor Presidente, le rogaría que me autorizase a defender conjuntamente las enmiendas números 41 y 42.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): De acuerdo.

El señor BOSQUE HITTA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, repetimos la misma filosofía que hemos manifestado hasta el momento. Se trata de dos enmiendas, la 41 y la 42; la 41 está orientada a corregir el texto del Título II, en el sentido que ya fue recogido en Comisión en una enmienda «in voce» sobre el texto primitivo que habíamos presentado y que quiere decir que el Título II se llamaría entonces, según nuestra enmienda, «De quienes alcanzaron responsabilidades de mando durante la guerra civil».

La enmienda 42 va orientada a dar un texto alternativo a una parte del Título II. Esta enmienda alternativa sería sustitutoria de los artículos 4.º y 5.º que figuran en el dictamen, y tiene por objeto, repito, volver otra vez a recoger la filosofía mantenida y, además, como he podido referir ante SS. SS., al parecer también sostenida por personas como el Diputado señor Busquets, del Partido Socialista, o como el Diputado comunista, a cuya intervención antes di lectura, o por el propio Ministro de Defensa cuando hacía manifestaciones en relación a que había que proporcionar igualdad de situaciones a los provisionales o de campaña de uno y otro bando.

En este aspecto está redactado el articulado de nuestra enmienda, y con ello lo que se pretende es que, globalmente, sin discriminación y sin referencias a uno u otro bando, puedan ser amparados todos aquellos que tuvieron responsabilidades de mando en cualquiera de los dos bandos, y esto sí que sería un reconocimiento nuevo que hasta el momento no existía, reconocen unos determinados derechos y unas determinadas pensiones. Está plan-

teado globalmente; se trata sencilla y exclusivamente de aquellos que consiguieron esta situación de mando en la guerra civil sin discriminación de ninguno de los dos Ejércitos. Con ello, nos parece que lo que estamos planteando es una situación de justicia.

En caso de que fuera aprobada esta enmienda anuncio, de entrada, la retirada de la enmienda 42, y, en caso de que no se aprobara, esta enmienda 42 también sería retirada por nuestra parte, porque a lo que no estaríamos dispuestos —y ahora lo contemplamos así— es a que quedasen vergonzantemente recogidos los derechos de una mitad de los que deben estar amparados por esta disposición.

El contenido de la enmienda, repito, no introduce ningún otro elemento diferenciador, ni en cuanto a derechos ni en cuanto a pensiones ni reconocimiento de servicios, mas que el hecho concreto de que sean los que tuvieron alguna responsabilidad de mando en cualquiera de los dos ejércitos que contendieron en la guerra civil.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Para turno en contra, el señor Ruiz Mendoza tiene la palabra. *(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)*

El señor RUIZ MENDOZA: Bajo un cúmulo de emociones que pesan sobre mi cerebro y mi corazón —y no es poesía—, y después de haber escuchado las maravillosas palabras de mi maestro don José Prat y también la exposición de Juan José Laborda, mi querido amigo y compañero, sería casi obvio, inútil, el hablar, porque creo sinceramente que después de nuestra Constitución, aprobada en un referéndum nacional, que dio un sí enorme y rotundo al deseo de todo el pueblo español de volver a un sistema democrático, esta mañana creía yo, sentado ahí en el escaño, que al presentarse este proyecto de ley, discutido en Comisión entre caballeros Senadores, iba a ser aprobado, después de retirarse ciertas enmiendas, prácticamente por aclamación. Hubiera sido la prueba más evidente de que no hay trincheras, de que los bloques han sido totalmente cerrados en España y, como me decía mi amigo particular, el Capitán General de la III Región, don Manuel Vallespín González, hablando de temas de la guerra, uno enfrente de otro: «Ojalá nunca más en España puedan plantearse situaciones como las sufridas en una guerra llamada civil, pero que fue incivil».

No obstante, nos encontramos, señores Senadores, en presencia de un proyecto de ley, y no hay más remedio que tratar de los títulos, artículos, etcétera.

Pues bien, no a la enmienda 42, del Grupo Popular. Y no por un capricho, sino porque la filosofía expuesta por don José Prat esta mañana es la filosofía correcta. No decir no a los militares no profesionales. En una buena hermenéutica jurídica de un proyecto de esta naturaleza hay que señalar, de una manera ordenada, con auténtico criterio de juristas, los casos que se han de contemplar, y se contemplan los supuestos que se señalan en el Título I con claridad, y así han sido discutidos y aprobados. Y ahora no empecé en absoluto la bondad que a todos nos preside, en nuestro espíritu de concordia y de amistad, el

estimar la nominación del Título II. Porque, en definitiva, señores Senadores, es historia, y Clío, la diosa de la historia, acepta todos los hechos y los lleva hacia un futuro, como ha dicho don José Prat, para enseñanza, para no volver a caer en los mismos errores del pasado.

En definitiva, ¿qué dice nuestro Título II, tal y como ha quedado el dictamen de la Comisión? Del personal ingresado al servicio de la República en las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público o Cuerpo de Carabineros durante la guerra civil. Este es el Título, ni más ni menos —por una buena hermenéutica jurídica me permito insistir en la frase—, discriminando, no, sino separando jurídicamente dentro de un proyecto de ley y dentro de una futura ley —creo que será ley— los supuestos que contemplan los Títulos I y II. Esto no es, en modo alguno, rasgarse las vestiduras y empezar otra vez una situación de diferencias, no. Es contemplar la realidad de unos hechos, llevarlos y plasmarlos en unas soluciones que el legislador ha de contemplar.

Como muy bien decía don José Prat, las leyes son perfectibles, y para todos nosotros es una razón cierta y total; son perfectibles. Evidentemente, las Cámaras tienen posibilidades para perfeccionar esto con nuevas soluciones de futuro y nuevas proposiciones.

A mi compañero el Senador Bosque Hita, al que en ocasiones, en Comisión, he considerado como un Senador reflexivo, le pido que entienda que el mantener nosotros esta posición no es abroquelarnos en una postura de antagonismo histórico. Y conste una cosa, señores, yo estuve en esa guerra civil, padecí la guerra civil y no me voy a beneficiar de esto en modo alguno, por razones que a la Cámara no importan. Vengo objetivamente a defender lo que evidentemente, históricamente, se debe defender. Creo que todos nosotros, los Senadores, estamos en la buena disposición de que este proyecto de ley se convierta en ley y que el día de mañana se perfeccione para bien de todos los españoles.

Leamos todos los días un poquito el preámbulo de la Constitución. Yo me voy a permitir ahora insistir en su lectura porque para muchos Senadores y para muchos españoles parece ser que no existe: «La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía proclama su voluntad de...».

La voluntad nuestra, señores de la Cámara, es ahora, en lo posible, reparar unas situaciones históricas que ya debemos desterrar totalmente y para que en el futuro nuestros hijos y nuestras nietas —y lo digo así, con orgullo— en modo alguno puedan incidir en lo que en mi época desgraciada incidimos muchos españoles. Nada más. *(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno de portavoces? *(Pausa.)*

Pasamos a las votaciones. *(El señor Fernández Fernández-Madrid pide la palabra.)* Tiene la palabra S. S.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Señor

Presidente, las enmiendas números 41 y 42 pueden votarse agrupadamente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Fernández-Madrid. Así se hará.

Votamos la enmienda número 13, del Grupo Cataluña al Senado. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 127; a favor, dos; en contra, 125.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos las enmiendas números 41 y 42, del Grupo Popular.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 128; a favor, 16; en contra, 112.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el texto del dictamen.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 132; a favor, 131; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

El señor PRESIDENTE: Entramos en el artículo 4.º. En primer lugar, la enmienda número 10 de Cataluña al Senado. El señor Ferrer tiene la palabra. Artículo 4.º

El señor FERRER I PROFITOS: La doy por defendida, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: No hay turno en contra.

El Grupo Mixto tiene la enmienda número 3. El señor Fernández-Piñar tiene la palabra.

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: La doy por defendida, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Popular va a defender las enmiendas 45 y 46?

El señor PRIETO CARRASCO: Sí, señor Presidente.

Señorías, las enmiendas que nosotros hemos presentado, la número 45, que agrupamos con la 46 y la 48, se refiere a un párrafo de la ley en el que se dice: «... al servicio de la República en las Fuerzas Armadas...», y nosotros pedimos que se diga: «... en las Fuerzas Armadas bajo el mando del Gobierno republicano...» Y voy a explicar el porqué:

Señorías, en los debates parlamentarios de los artículos 1.º y 2.º de la Constitución que fueron precisos para aprobar el texto constitucional se señaló que la nación española es una realidad preconstitucional. Asimismo, como señala el artículo 8.º de la Constitución, las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Arma-

da y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial. Y todo ello con independencia del Gobierno o régimen político vigente en cada momento.

Lo que se trata de lograr con este proyecto de ley, según reza en la explicación de motivos, es precisamente la equiparación de los derechos y que no haya ninguna discriminación. Nosotros, obviamente, entendemos que el texto debería responder precisamente al principio de que las Fuerzas Armadas están, han estado y habrán de estar al servicio de España, con independencia del régimen, gobierno u organización política vigente. De ahí que propongamos que se modifique el artículo 4.º y el punto 1 del artículo 5.º en el sentido de referirse precisamente al personal que hubiera ingresado en las Fuerzas Armadas bajo el mando del Gobierno republicano en el período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para turno en contra tiene la palabra el señor Velilla.

El señor VELILLA ROYO: Gracias, señor Presidente.

Han sido aprobados el título de la ley y los dos títulos siguientes y, consiguientemente, reproducir nuevamente los argumentos parece innecesario. Indudablemente, no voy a entrar en disquisiciones filosóficas, que nos llevarían posiblemente hasta Platón, respecto al tema que S. S. presenta. Sencillamente consideramos que han quedado plasmadas ya en los debates anteriores las motivaciones del reconocimiento de que son objeto las Fuerzas de la República. Por lo tanto, en aras de la brevedad, vamos a votar en contra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Ferrer.

El señor FERRER I PROFITOS: Señor Presidente, como vemos que las enmiendas defendidas anteriormente no mejoran en nada ni cambian el proyecto de ley, nos parece que no es oportuno votarlas a favor.

Por otra parte, se está diciendo que esta ley puede ser perfectible, pero por la edad que tiene los militares que están en esta situación, no les va a dar tiempo a beneficiarse de ella.

Además, quisiera decir una cosa, que se deje tranquilo al señor Prat, porque, con todos mis respetos, el señor Prat en ningún momento ha dicho que se marginara a los militares efectivos que lo fueron, aunque fuese después del 18 de julio.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bosque.

El señor BOSQUE HITA: Señor Presidente, señorías, no se trató ahora de defender la filosofía de toda nuestra postura ante esta ley. Lamentamos que, al final, la ley

vaya a salir con este sentido parcial. Todas las palabras que se han dicho aquí alrededor de la superación no tienen ninguna clase de sentido, puesto que no se supera nada, se deja para el futuro.

En cuanto al texto de ley, tal y como está, reducido exclusivamente a aquéllos que participaron en un solo Ejército en la guerra, diciendo el Ejército de la República, no nos parece suficientemente adecuado. Por la misma razón tendríamos que decir, en este momento, Ejército de la Monarquía y tendríamos que seguir diciendo en cada caso la forma de Estado que se tuviera en cada momento. Es el Ejército de España. Y no creo que se nos pueda aducir que España no existe, que hay que hablar del Estado español. Porque habría que volver a la Constitución y la Constitución en su artículo 1.º habla de que España se constituye en Estado, luego España ya existe. En el artículo 3.º se habla de la riqueza lingüística de España; en el 4.º de la bandera de España; en el 8.º de las Fuerzas Armadas al servicio de España. España existe, y yo creo que la denominación adecuada es la de Ejército de España.

Voy a relatarles a SS. SS. un acontecimiento vivido por mí en Barcelona, invitado por una serie de excombatientes allá por el año ochenta. Al llegar me encontré con que no había bandera. Yo dije que no entraba mientras no hubiera bandera, que tenían que ser dos, la nacional y la catalana, porque estábamos en Cataluña. Me dijeron que era imposible y yo me negué a participar en aquel acto. Me pidieron que esperara y, al tiempo, me vinieron a dar la solución: ya estaban puestas las banderas. Lo que ocurría es que ellos no querían poner la bandera nacional, sino la republicana. Fue un acto multitudinario en un local público, con anfiteatro, y abarrotado. Las personas que habían tenido el problema de la bandera republicana estaban entusiasmadas. Había gritos a favor de los dos bandos que habían luchado, sólo pensando en España, aunque cada uno de ellos tuviera una idea distinta. Al final, todo aquel auditorio, a mi requerimiento, se despidió con abrazos cordiales y repitió con un entusiasmo indescriptible por tres veces un ¡Viva España! que resonó en Barcelona como sólo puede resonar en una tierra verdaderamente española. Y yo puedo decir que, después de aquel almuerzo multitudinario, con aquellas personas que habían combatido al lado de la República, los vivos a España salían por todos lados.

Decir Ejército de la República me parece que es parcializar la situación. Creo que es más propio el sentido de las enmiendas que hemos presentado: Ejército bajo el mando del Gobierno de la República. Con eso no hipotecamos para el futuro cualquier clase de denominación.

Estoy convencido de que quienes participaron en el Ejército, que según el texto es Ejército de la República, pero debe ser Ejército bajo el mando del Gobierno de la República, estoy seguro que todos ellos en estos momentos están deseando que se llame Ejército de España, como lo ha sido siempre y nunca dejó de serlo. Nada más.

El señor PRESIDENTE: El señor Martínón tiene la palabra.

El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente, señorías, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular consiste en que en lugar de Ejército al servicio de la República, se diga Ejército bajo el mando del Gobierno de la República.

El señor Bosque Hita se ha referido a una serie de cuestiones que entendíamos no estaban en discusión; incluso ha insistido en la existencia de España como anterior a la Constitución, como si aquí alguien hubiera puesto en duda ese hecho. Nadie lo ha discutido.

Creemos que el término «Ejército de la República» o «al servicio de la República» está acuñado y aceptado históricamente por todos y que todos entendemos también a quiénes nos referimos.

Es cierto que el Ejército es el Ejército de España, y que está al servicio de España también es cierto, pero acépteme la reflexión de que el Ejército que está al servicio de España también debe estar a las órdenes del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 128; a favor, dos; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la enmienda número 3, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 133; a favor, uno; en contra, 132.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la enmienda número 45, del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 130; a favor, 14; en contra, 116.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 46, también del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 130; a favor, 13; en contra, 116; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 119; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen.

Artículo 5.º Voto particular correspondiente a la enmienda número 5, del Grupo Mixto. Artículo 5.º

Tiene la palabra el señor Fernández-Piñar.

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: La doy por defendida, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: La enmienda 48, del Grupo Popular, ya ha sido defendida.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Votamos la enmienda 5, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 133; a favor, uno; en contra, 132.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 48, del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 135; a favor, 15; en contra, 120.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 137; a favor, 121; en contra, uno; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

A continuación entramos en la discusión de la enmienda número 49, del Grupo Popular, de adición. ¿Había sido retirada, señor portavoz?

El señor BOSQUE HITA: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Se tiene por retirada. Artículo 6.º

Votamos el artículo 6.º, que no tiene enmiendas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 138; a favor, 136; en contra, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

A continuación entramos en la discusión del artículo 7.º Artículo 7.º

Enmienda número 50, del Grupo Popular. El señor portavoz tiene la palabra.

El señor RIBAS DE REYNA: Señor Presidente, ya he visto que el dictamen se ha cambiado porque antes se decía solamente en el registro administrativo correspondiente y no se especificaba en qué Ministerio se tenía que presentar la solicitud de inscripción. Nosotros entendemos que la Ponencia en su informe establece que es el

Ministerio de Economía y nosotros consideramos que con nuestra enmienda especificamos que sea justamente el Ministerio de Defensa, que es donde están todos los archivos, toda la documentación y creemos que está precisamente el personal idóneo para llevar este registro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno en contra? (Pausa.)

El señor Campoamor tiene la palabra.

El señor CAMPOAMOR RODRIGUEZ: Realmente seguimos manteniéndonos en que sea el Ministerio de Economía y Hacienda, entre otras cosas porque la fijación de esta pensión se efectúa en este momento «ex novo» y se establece abiertamente ahí y ya el Ministerio de Economía y Hacienda recurrirá a los servicios del Ministerio de Defensa para la acreditación de servicios prestados que pudieran hacerse.

El señor PRESIDENTE: A continuación, voto particular correspondiente a la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor portavoz tiene la palabra.

El señor FERNANDEZ-PIÑAR Y AFAN DE RIBERA: La doy por defendida, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Votamos la enmienda número 50, del Grupo Popular. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 135; a favor, 14; en contra, 121.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 6, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 135; a favor, uno; en contra, 134.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se vota el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 135; a favor, 120; en contra, uno; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Artículo 8.º Entramos en el artículo 8.º, al que existe una enmienda transaccional firmada por todos los portavoces. Ruego al señor Secretario que lea el texto de la misma.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Rodríguez Pardo): Las modificaciones que se introducen en esta enmienda significan que en el actual número 1 del artículo 8.º desaparece la referencia a «y los huérfanos». Seguidamente, en lugar de «interesados», figura la palabra «causantes».

Al final de este número 1 se suprimen las palabras «o de orfandad». Tiene un número 3, nuevo, cuyo texto es el siguiente: «Tendrán derecho a las pensiones incluidas en el título II de la presente Ley los huérfanos de los causantes, siempre que reúnan las condiciones exigidas por la legislación general de clases pasivas para ser pensionistas de orfandad, fueran menores de veintiún años o que, siendo mayores de dicha edad, estuvieran incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla y tuvieran derecho al beneficio de la justicia gratuita». Derivado de la inclusión de este número 3 nuevo, los actuales números 3, 4 y 5 del texto del artículo 8.º, según el dictamen de la Comisión, pasan a ser los números 4, 5 y 6.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Vamos a votar el artículo 8.º conforme a la modificación sufrida en virtud de la enmienda transaccional.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 136; a favor, 135; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sometemos a votación la disposición transitoria primera, que no tiene enmiendas. Disposiciones transitorias

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 136; a favor, 135; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

La disposición transitoria segunda tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, la número 54. El portavoz de dicho Grupo tiene la palabra.

El señor BOSQUE HITTA: Señor Presidente, señorías, esta enmienda trata de perfeccionar y mejorar los beneficios que se conceden, de tal manera que estimamos que los derechos alcanzados a través de la legislación de referencia, la Ley 46/1977, a la que aquí se hace mención, no deben congelarse en el año 1984, sino que estos derechos deben mantenerse, porque, si no, lo que podría hacer esta Ley sería perjudicar a quienes ya tenían unos derechos contraídos anteriormente.

Lo que mi Grupo propone es que se sigan percibiendo las pensiones que se derivan de la Ley 46/1977, no con arreglo a la cuantía fijada en 1984, sino con aquellas que puedan tener en el futuro hasta el momento en que la cuantía de la pensión que se reconoce por esta nueva Ley vaya a ser superior a la reconocida anteriormente por la Ley 46/1977. En este mismo momento, los interesados deberían recibir una cuantía más generosa en concepto de pensión. Esto es lo que nuestro Grupo propone.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) El señor Campoamor tiene la palabra.

El señor CAMPOAMOR RODRIGUEZ: Está claro que esto se refiere al personal incluido en el Título II y que

responde realmente a una posición política que nuestros portavoces han explicado suficientemente al decir que todos aquellos que pertenecieron a las Fuerzas de Orden Público, Cuerpo de Carabineros y tuvieron mando durante el período de 1936 a 1939 al servicio de la República sean considerados de la misma forma.

Todos sabemos, y no hay por qué extenderse y precisar, que hay gente que, de alguna forma, más o menos adecuada, llegó a conseguir, como funcionarios civiles, acogerse a la Ley 46/1977. Esta es una anomalía que queremos paliar con esta transitoria. Estos señores ya tienen las pensiones congeladas desde hace dos años, no es que se las congelemos nosotros ahora; lo que hacemos ahora es establecer que sigan manteniendo eso, que se considere como una cosa personal. Cuando las pensiones que les corresponden ahora, con arreglo al Título II de la Ley, lleguen a alcanzar el importe de la pensión que están cobrando en este momento, seguirán progresando con todos los demás compañeros. Se trata simplemente de evitar una discriminación y nos parece que, en el afán de reconocer a todos los mismos derechos y acreditación de servicios, no habría ninguna dificultad en aceptar esta transitoria segunda.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Votamos la enmienda 54, del Grupo Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 133; a favor, 14; en contra, 119.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 133; a favor, 120; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición transitoria segunda.

A continuación, si la Cámara no tiene inconveniente, se van a votar agrupadamente, por no tener enmiendas, las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, la disposición derogatoria y las disposiciones finales primera y segunda.

¿Está conforme la Cámara en que se voten agrupadamente? (Asentimiento.)

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 135; a favor, 125.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas propuestas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Se levanta la sesión. (Fuertes y prolongados aplausos de todos los señores Senadores, puestos en pie y mirando hacia la tribuna del público.)

Era la una y cincuenta de la tarde.

Disposiciones
adicionales
primera,
segunda y
tercera.
Disposición
derogatoria y
Disposiciones
finales
primera y
segunda

Imprime RIVADENEYRA, S. A. - MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 247-23-00.-28008 Madrid

Depósito legal: M. 12.580 - 1961